



Facultad de Derecho y  
Ciencias Humanas

Tesis:

“LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS  
DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS”  
Ambigüedad del artículo 132° de la Ley Universitaria

Bachiller

Sr. Jair Alexander Patiño La Rosa

para optar el Título Profesional de Abogado

Lima – Perú

2018

**DEDICATORIA:**

A MIS PADRES, QUIENES HAN SABIDO GUIARME A LO LARGO DE MI VIDA Y BRINDARME SU APOYO INCODICIONAL EN CADA DECISIÓN Y PROYECTO EMPRENDIDO.

A MIS HERMANOS Y A MIS SOBRINOS QUIENES LE DAN UN PROPÓSITO A MI VIDA.

A TI, QUE CON NUESTROS CONSTANTES DEBATES Y APOYO CONSTANTE ENRIQUESISTE LA INVESTIGACIÓN E HICISTE POSIBLE CULMINAR ESTA TESIS.

### **AGRADECIMIENTOS:**

A LOS MUCHOS BUENOS AMIGOS. QUE ME ESTIMULARON, PARA ELLOS, MI ETERNO AGRADECIMIENTO, MI FRANCA AMISTAD Y ENTRE ELLOS DE MANERA ESPECIAL A LOS CATEDRÁTICOS QUE CONTRIBUYERON A LA PRESENTE TESIS.

## **RESUMEN**

La presente tesis titulada *“La vulneración a los derechos de los docentes en las universidades públicas”*, tiene como problema principal: *¿De qué manera la ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220, producto de la mala técnica jurídica, vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas?*, a su vez, tiene como objetivo principal: Realizar un estudio analítico de tipo propositivo sobre la ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220, producto de la inadecuada técnica jurídica, y la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas.

Siguiendo los conceptos metodológicos de San Pieri (2006), podemos identificar que esta investigación presenta una naturaleza transeccional descriptiva y correlacional, puesto que, en un primer momento, se buscará validar el conocimiento partiendo del análisis de la realidad del docente de la universidad pública peruana en la última década, para luego medir el grado de relación que existe entre su participación en la gestión administrativa de la universidad pública y los bajos estándares de calidad en los servicios educativos que se han brindado a los estudiantes universitarios, con el objeto de definir el por qué el legislador peruano consideró necesario establecer una prohibición a los docentes universitarios en el tenor del artículo 132 de la Ley Universitaria.

La población para la encuesta fue de 42 personas, abogados con especialización en Derecho Constitucional, con una muestra óptima de 40 de los profesionales antes mencionados, además formaron parte de entrevistas, debates con entendidos en la materia y análisis de casos. El análisis estadístico fue llevado a cabo a través del uso de gráficos circulares.

**Palabras claves:** Derechos fundamentales, libertad de enseñanza, derecho a la igualdad, derechos laborales, docentes universitarios, Ley Universitaria.

## **ABSTRACT**

The present thesis titled "The violation of professors' rights at public universities", has as the main problem: How does the ambiguity in the interpretation of Article 132° of the Law 30220, a product of a bad legal technique, violates the recognized constitutional rights of professors at public universities?, besides, it has as the main objective: To carry out an analytical study of a propositional type on the ambiguity in the interpretation of Article 132° of the Law 30220, as a result of an inadequate legal technique, and the violation of the recognized constitutional rights of professors at public universities.

Following the methodological concepts of San Pieri (2006), we can identify that this research presents a transectional, descriptive and correlational nature; since, at first place, we will search to validate the knowledge from the analysis of a professor's reality at Peruvian public universities in the last decade, to then measure the degree of relation between his participation in the administrative management of public universities and the low standards of quality in the educational services that have been provided to universities students, with the object of defining why the Peruvian legislator considered necessary to establish a prohibition to the professors at public universities in accordance to Article 132° of the University Law.

The population for the survey was 42 people, within lawyers with specialization in constitutional law, with an optimal sample of 40 professionals, they were part of interviews, debates and analysis of cases. The statistical treatment was carried out by the use of pie charts.

**Key words:** Fundamental rights, Freedom of education, right to equality, labor rights, university teachers, University Law.

## ÍNDICE

	Pág.
CARÁTULA.....	1
DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO.....	3
RESUMEN.....	4
ABSTRACT.....	5
ÍNDICE.....	6
INTRODUCCIÓN.....	9

### CAPÍTULO 1:

#### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Explicación del problema.....	11
1.2. Causas.....	17
1.3. Consecuencias.....	18
1.4. Posible solución.....	19
1.5. Pregunta de investigación.....	21
1.5.1. Pregunta General.....	21
1.5.2. Preguntas Específicas.....	21
1.6. Objetivos.....	22
1.6.1. Objetivo General.....	22
1.6.2. Objetivos Específicos.....	22
1.7. Justificación.....	22

### CAPÍTULO 2:

#### HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1 Hipótesis General.....	25
2.2 Hipótesis Secundarias.....	25
2.3 Variables (Definición Conceptual y Operacional).....	26

### **CAPÍTULO 3:**

#### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

3.1. Metodología de la Investigación.....	27
3.1.1. Método y diseño.....	28
3.1.2. Diseño muestral .....	29
3.2. Técnicas de investigación.....	30
3.2.1. Encuestas.....	30
3.2.2. El Cuestionario.....	30
3.2.3. Análisis de registro documental.....	31

### **CAPÍTULO 4:**

#### **MARCO TEÓRICO**

4.1. Bases epistémicas.....	32
4.1.1. Neo constitucionalismo.....	33
4.1.2. La constitucionalización del derecho.....	34
4.1.3. Constitucionalismo social.....	35
4.1.4. Derechos humanos laborales .....	36
4.1.5. Garantismo social.....	40
4.1.6. La teoría de la justicia de Rawls.....	41
4.2. Bases teóricas.....	43
4.2.1 Ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220, producto de la mala técnica jurídica.....	43
4.2.1.1. La Universidad.....	43
4.2.1.2. La realidad de la universidad peruana.....	43
4.2.1.3. La Ley Universitaria.....	45
4.2.1.4. Motivos de la Ley 30220.....	47
4.2.1.5. Características de los profesores universitarios, en la Ley Universitaria .....	50
4.2.1.6. Técnica legislativa.....	50
4.2.1.7. Técnica legislativa en la ley N° 30220.....	51
4.2.1.8. Experiencia comparada.....	53

4.2.2. Derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas .....	54
4.2.2.1. Derechos de las personas .....	54
4.2.2.2. La libertad de enseñanza .....	55
4.2.2.2.1. Definición y alcances .....	55
4.2.2.2.2. Libertad de cátedra .....	56
4.2.2.3. Derecho a la igualdad .....	57
4.2.2.4. Derecho al trabajo .....	59
4.3. Proporcionalidad de la prohibición contenida en el artículo 132° de la Ley Universitaria .....	60
4.3.1. Análisis de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la gestión de la universidad pública, frente a la mejora de la calidad universitaria .....	61
4.3.2. Análisis de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la gestión de la universidad pública, frente a evitar la comisión de actos de corrupción en la gestión administrativa de la universidad pública .....	62
4.3.3. Análisis de la temporalidad de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la administración de las universidades públicas .....	64
4.4. Bases legales .....	65

## **CAPÍTULO 5:**

### **PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**

5.1. Resultados .....	67
5.2. Discusión de los resultados .....	79
5.3. Propuesta .....	87
<b>Conclusiones</b> .....	91
<b>Recomendaciones</b> .....	93
<b>Anexos</b> .....	96
<b>Glosario</b> .....	102
<b>Bibliografía</b> .....	104



## **INTRODUCCIÓN**

Nuestra tesis tiene como unidad temática la incidencia de: “*La vulneración a los derechos de los docentes en las universidades públicas*” *Ambigüedad del artículo 132° de la Ley Universitaria*. Dicha unidad temática se estructura a partir de la realidad que viene atravesando nuestro sistema educativo superior, específicamente en el ámbito universitario, con la promulgación de la Ley 30220, Ley Universitaria promulgada en setiembre del 2014, que trae diversas innovaciones sobre la correcta regulación del quehacer universitario.

El contenido de la ley, ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, tales como: La autonomía universitaria; un nuevo rol de una institución que está dando mucho que hablar como es la Sunedu; las tesis como la única forma para obtener el grado; el requisito sine quanon del idioma; la edad límite para enseñar en la cátedra; la autonomía universitaria, entre otros. Nuestra investigación se centrará en uno de ellos, que vulnera diversos derechos fundamentales, como es la prohibición tácita.

Destaca Ramírez (2008) que “las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro” (p.3), la educación universitaria tiene el deber de formar

profesionales con la capacidad de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante cambio, y con una mejor conciencia de los problemas sociales a solucionarse. Este objetivo, es consecuencia de una formación y preparación rigurosa por parte del estudiante universitario, unido al conocimiento o guía que hacen los catedráticos en la universidad, quienes imparten su saber acorde a los presupuestos de vanguardia que demanda esta sociedad competitiva.

Dicha realidad, se ha puesto en peligro con la dación de la actual ley universitaria, que entre sus tantos aciertos, desde nuestra lectura, cometió un craso error al condicionar el ejercicio de la cátedra, a los docentes que con su experiencia, son los llamados con su trabajo, a lograr que los profesionales estén acordes con las nuevas competencias que exige este mundo global, que está atravesando uno de los mayores momentos de transformación de su historia, donde se exige a los mejores, y por ello necesita a los mejores profesores universitarios. Esto no ocurre con lo regulado por el artículo 132° del Capítulo XV, de la ley universitaria, cuando hace referencia al personal no docente e indica que estos serán *quienes lleven la gestión administrativa de las universidades públicas*, teniendo como consecuencia una prohibición a los docentes de universidades públicas, de no participar de la gestión de la universidad pública donde enseñen, disposición que a todas luces genera una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que contravienen la legislación de un país que busca estar acorde a la corriente neo constitucionalista, corriente en la que prima la tutela de los derechos fundamentales, lo cual no ocurre con este artículo, pues vulnera flagrantemente el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad.

## **CAPÍTULO 1**

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

#### **1.1. Explicación del problema**

Destacando la urgencia de mejorar la calidad de la educación universitaria para formar profesionales y ciudadanos comprometidos y competentes, que estén a la altura de las demandas y exigencias del mercado laboral. Cabe destacar que el Estado, viene realizando diferentes reformas, con el objetivo de lograr dicha calidad educativa, reformas que se concretan a través de leyes, algunas pertinentes, otras que han generado un arduo debate entre los conocedores de esta problemática.

En setiembre del 2014, se promulgó la Ley 30220, Ley Universitaria, la cual trae diversas innovaciones sobre la correcta regulación del quehacer universitario. El contenido de la ley, ha sido objeto de diferentes cuestionamientos. Sin embargo, hoy proponemos centrar el debate, en el rol que cumple el Docente Universitario y no en el extremo de, ser aquel profesional capaz de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino específicamente en el rol que puede cumplir en la administración y gestión de la Universidad Pública.

Al revisar la Ley Universitaria, encontramos que en su Capítulo XV, artículo 132° se hace referencia al Personal no docente e indica que estos serán quienes lleven la gestión administrativa de las universidades públicas, estableciendo de esta manera una prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, quienes no podrán participar de la gestión de la universidad pública donde enseñen, disposición que ha generado gran incertidumbre en la comunidad universitaria, la misma que ante la ambigüedad de la norma prefiere limitar la participación de los docentes o denunciar penalmente a quienes lo hacen.

“Artículo 132. Personal no docente

El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponde los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o privada. La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores públicos no docentes de los regímenes laborales vigentes. (El subrayado es nuestro).”

Es menester señalar que la Constitución Política vigente de nuestro país señala que toda persona humana logra su desarrollo integral mediante la educación. Además, la Constitución establece como un derecho fundamental la libertad de enseñanza; sin embargo, observamos que, pese a existir un reconocimiento constitucional que garantiza la libertad del docente para enseñar libremente, se limita a este el poder desarrollarse profesionalmente en la administración de la universidad pública obligándolo a elegir entre enseñar o pertenecer a la administración de la universidad pública, vulnerándose así el derecho al trabajo del que toda persona goza.

Además, no debe dejarse de lado las repercusiones penales que este podría tener por asumir cargos administrativos dentro de la universidad pública, pues se podría subsumir dicha conducta dentro del tipo penal de nombramiento o aceptación indebida para cargo público tipificado en el artículo 381° del Código Penal Peruano. Es claro que estamos

frente a una prohibición administrativa que lo limita o desalienta a ocupar algún cargo en la gestión universitaria, y de manera preliminar deja de lado toda la capacidad profesional que el docente pueda tener para desarrollar el cargo para el cual se le estaría nombrando. Lo cual termina siendo una contradicción de la norma, pues se le confía el futuro del país, dándole la posibilidad de enseñar a jóvenes universitarios, contribuyendo a su formación como profesionales, pero se le margina de aportar dichos conocimientos en la gestión universitaria. Es por eso que el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria representa una gran confusión para la comunidad universitaria, pues su aplicación literal incluso representaría una discrepancia manifiesta a la Constitución Política del Perú la cual en su artículo 146°<sup>1</sup> indica que incluso la docencia es la única actividad compatible con la función jurisdiccional, dando la posibilidad a todos los jueces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Hemos identificado que muchos de los docentes se abstienen de participar en la administración de las universidades públicas por miedo a ser denunciados por el delito tipificado en el artículo 381° del Código Penal. El delito de nombramiento o aceptación indebida para cargo público termina siendo el arma utilizada para condicionar los derechos de los docentes universitarios, por esta razón, en muchas universidades públicas se está optando por utilizar diferentes nomenclaturas como reasignaciones, destacados, permutas, rotaciones, desplazamientos, promociones, encargaturas y designaciones a cargos de confianza a fin de incluir en su gestión administrativa a docentes universitarios sin incurrir en tipo penal de nombramiento ilegal.

---

<sup>1</sup> **Artículo 146.-** La función jurisdiccional es incompatible con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los jueces sólo perciben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley. El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. 2. La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento. 3. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función. 4. Una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía.

En efecto, como señala Silva (2010) “los funcionarios con la finalidad de no incurrir en el tipo penal del nombramiento ilegal, utilizan otros términos y de esta manera pretenden burlar la ley penal y no ser juzgados por el delito que cometen, valiéndose de una serie de artificios para no recibir la sanción que les correspondería” (p,8). Pero más allá de la poca técnica legislativa para regular de manera correcta el delito de nombramiento indebido, se ha buscado, a partir de esta deficiencia dar una salida a la arbitraria prohibición del art. 132º. Debemos dejar en claro que no es nada plausible tener que estandarizar una práctica, que a todas luces no es correcta, con la única finalidad de no causar un perjuicio mayor a los docentes universitarios limitando sus derechos constitucionalmente reconocidos como el derecho a la libertad de enseñanza, derecho al trabajo y el derecho a la igualdad.

La importancia de los derechos fundamentales es lo que identifica al Estado Constitucional de Derecho. Como dice Sosa (2010) “En efecto contemporáneamente se consideran a los derechos fundamentales, como los bienes más valiosos dentro de las constituciones, los que invaden el ordenamiento jurídico y vinculan toda la actividad estatal, incidiendo en todas las ramas del derecho” (p.5).

Entre los derechos humanos que vulneraría la ley universitaria tenemos que la prohibición sobre la participación del docente en la gestión de la universidad pública, vulnera la libertad de enseñanza, que el artículo 13 de la Constitución tutela, y tiene un rol prioritario, porque a través de este derecho, toda la persona tiene que educarse constantemente y el deber del docente es de brindar los conocimientos que poseen. La libertad de enseñanza se relaciona con la libertad de cátedra, que según Bernal (1996) “es un derecho y un deber del catedrático conducir su enseñanza con libertad de pensamiento” (p. 173).

El contenido del derecho a la libertad de enseñanza es amplio, porque implica que el Estado, debe hacer lo posible; esto es, dotar de los elementos necesarios como presupuesto, infraestructura, en condiciones iguales para que todos accedan a la educación, en los centros educativos correspondientes, de acuerdo a su nivel.

Encontramos que en sintonía con el derecho a la igualdad, toda persona que se encuentre en igualdad de condiciones debe poder acceder a un puesto de trabajo, así como debe tener las mismas opciones para conservar su puesto de trabajo e incluso tener la opción a una promoción; lo cual no ocurría con los docentes universitarios, quienes vienen siendo rezagados y desincentivados a ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita del artículo 132º de la Ley Universitaria.

El derecho a la igualdad, según lo expresado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de los Exps. Nrs. 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados), fundamento 20:

“Además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social y democrático de derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribiera todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.”

Sobre el derecho al trabajo, nuestro Colegiado Supremo ha expresado en la Sentencia N° 01652-2012, Lima 15 de Junio del 2015, que contiene dos dimensiones: «El acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa justa».Estableciendo además, que para una mejor interpretación de los derechos que

reconoce nuestra Constitución se hace necesario recurrir al protocolo de San Salvador. De acuerdo a Arce (2013) "El derecho al trabajo, según este instrumento internacional, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones, de manera particular: (...) d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación"(p.3).

Finalmente se vulneran en forma flagrante el derecho al trabajo, el cual ahora tiene una nueva significancia, debido a que forma parte de los derechos humanos básicos contenidos en el artículo 23° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así que diversos autores, como Arese (2014) sustentan que los denominados "Derechos Humanos Laborales, son los atinentes a la simple condición humana o de persona y que se expresan en el ámbito del trabajo dependiente, lo que implica el desarrollo específico e integrado de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, un campo en que es posible y necesaria la idea de derechos humanos" (p. 33).

En nuestra legislación, los derechos laborales son concebidos como las facultades otorgadas por el Estado al trabajador con la finalidad de equiparar la posición de este en la ya desigual relación que mantiene con el empleador, el Estado además le ha encargado a entidades como el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el Poder Judicial a través de los juzgados especializados en materia laboral y los juzgados de paz letrado, la responsabilidad de cautelar los derechos de los trabajadores.



## **1.2. Causas**

Los problemas en torno al quehacer universitario, son de larga data, pero es en estos últimos años, cuando se hicieron más visibles las grandes falencias que tiene esta institución es que se tuvo la voluntad política para modificar las reglas de juego, buscando mejorar la calidad universitaria y luchar contra los grupos de interés que se habían enraizado en la administración de las universidades públicas.

Las causas son diversas, una de ellas son las posiciones e intereses de muchos políticos al respecto, por lo cual hay un sector que quiere mantener la situación de la educación con todas sus falencias, para poder utilizarla acorde a sus intereses personales, ideologías, o fines proselitistas y otro grupo que ve en su oposición una buena oportunidad de obtener mayores seguidores y votos.

Los motivos sociales son más que claros, por la educación se han logrado movilizaciones donde muchas universidades han intervenido, movilizaciones en las que se han producido diferentes conflictos, muchas veces radicalizando las medidas de protesta y otras siendo aplacadas mediante la excesiva fuerza de las fuerzas Policiales.

Además, es claro que existen intereses privados de los grandes grupos económicos que han fijado sus inversiones en la educación por encontrarlo muy rentable y han hecho de la educación universitaria una industria sumamente lucrativa, por lo cual la reforma universitaria es vista como un peligro para su gran negocio.

Pero también se han visto comprometidos los intereses de ciertos grupos que en la última década se habían enraizado en la administración de las universidades públicas y de mala manera, puesto que se han visto inmersos en diferentes denuncias por corrupción. Estas denuncias se presentaron en todas las Universidades Públicas del Perú identificándose

que el modo de operar era muy similar, formándose una suerte de organización criminal conformada por docentes y estudiantes.

En por eso que, en el marco de la aprobación de la Ley Universitaria, existía gran preocupación e indignación sobre la contribución negativa del docente universitario en la gestión y administración de las universidades públicas, se buscó ponerle fin a este problema mediante la incorporación del artículo 132º. La ratio legis de este artículo se ve también en muchas otras disposiciones como lo fue dar por terminadas todas las encargaturas o interinatos de jefes de áreas o autoridades. De esta manera se pudo sacar de la administración a muchas autoridades investigadas por corrupción. Sin embargo, no se había previsto en ese momento el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de la universidad pública.

### **1.3. Consecuencias**

En nuestro país se hace necesaria una legislación novísima que cumpla y contribuya a la modernización del Estado y que desarrolle un cuerpo normativo acorde a axiomas y principios constitucionales, sin embargo, la Ley 30220 contiene limitaciones a derechos fundamentales, una de estas, es la limitación a los docentes universitarios a participar de la administración de las universidades públicas, sin tener en cuenta que estos pueden contar con el perfil profesional idóneo para mejorar la gestión de las universidades públicas en el Perú y cuyo potencial profesional se puede ver marginado si continúa existiendo esta prohibición administrativa en la Ley Universitaria.

Primero, desde el análisis penal, la prohibición que establece el artículo 132º de la Ley Universitaria criminaliza el nombramiento de docentes universitarios en cargos administrativos, puesto que, dicha conducta se tipificaría dentro del verbo rector del tipo penal amparado en el artículo 381º del Código Penal sancionando a Docentes y Rectores

por tales nombramientos. Segundo, esta prohibición, desde el análisis sistemático de la norma jurídica, deviene en inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales de los docentes universitarios.

Además de condicionar a los docentes universitarios a elegir entre trabajar o enseñar, la prohibición contenida en el artículo 132° da fundamento a los Fiscales Provinciales para iniciar una persecución penal contra los docentes universitarios, pues al ser posible realizar la subsunción del tipo penal, estos estarían promoviendo acción penal contra muchos docentes denunciados, en su mayoría por vendettas políticas inherentes a las universidades públicas.

Por los fundamentos expuestos, en la presente investigación se ha tomado la postura de que, la prohibición tácita que contiene el artículo 132°, pese a cumplir con el Principio de Generalidad de las Normas establecido en el artículo 103° de la Constitución, no logra superar los supuestos del test de proporcionalidad, lo cual implica verificar si la prohibición es objetiva, idónea, necesaria y de corresponder el carácter temporal, tal como se ha establecido en diferentes Sentencias del Tribunal Constitucional, análisis que realizaremos más adelante.

#### **1.4. Posible solución**

Si bien las razones de la excesiva regulación que propone el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria tuvo entre sus intenciones, buscar revestir la administración de las Universidades Públicas y prevenir futuros focos de corrupción, que afecten el patrimonio del Estado, buscando por sobre todo evitar que se afecten la formación de las futuras generaciones de profesionales. No podemos privar a todos los docentes universitarios de poder ejercer función administrativa dentro de las universidades públicas, no solo privándoles el derecho constitucionalmente reconocido del trabajo y dándoles por ende

un trato diferenciado sin mediar causa objetiva justa, sino también dejando fugar talento al sector privado, talento que sería muy útil para concretar la anhelada reforma universitaria que todos esperamos.

El artículo 132º, es una norma, que vulnera flagrantemente derechos constitucionales como, el derecho a la libertad de enseñanza, derecho al trabajo y derecho a la igualdad, de allí que recomendamos diferentes mecanismos orientados a su derogación o en su defecto su modificación.

Primero, en el marco de la modificatoria y en aplicación del Principio de conservación de la Ley, se propone se realice por iniciativa del Poder Legislativo una modificación del artículo 132º, para que con mejor técnica jurídica pueda plasmar un texto más exacto y cuya interpretación literal no deje espacio a la duda, a fin que quede muy en claro que no nos encontramos frente a una prohibición administrativa pasible de una sanción penal y por ende a una norma inconstitucional.

Es preciso indicar también que el Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de interpretación desde la Constitución, puede también alinear el articulado cuestionado, mediante una sentencia interpretativa aditiva, desarrollada en el Fundamento 3.3.1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 004-2014-CC/TC, estableciendo un contenido interpretativo acorde a la Constitución.

Segundo, en el marco de su derogación, se coloca que se concrete vía acción de inconstitucionalidad, pues, este es uno de los mecanismos que permite retirar del marco normativo nacional, una norma que vulnera derechos protegidos constitucionalmente; de igual manera se propone su derogación vía propuesta del Poder Legislativo.

Siendo propicio en ambos casos se complemente vía reglamentación por las Universidades Públicas en virtud de la Autonomía que les brinda el artículo 8° de la propia Ley Universitaria, debiendo esta regulación realizarse bajo principios objetivos acordes a la Constitución.

### **1.5. Pregunta de investigación**

#### **1.5.1 Pregunta General:**

P.G. ¿La ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220, vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas?

#### **1.5.2. Preguntas Específicas:**

¿El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas?

¿El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la gestión administrativa de las universidades públicas, vulnerando su Derecho al trabajo?

¿La exclusión de los docentes en la gestión administrativa de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable?

## **1.6. Objetivos**

### **1.6.1. Objetivo General**

Determinar si la ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas por haber empleado una mala técnica jurídica en su formulación.

### **1.6.2. Objetivos Específicos**

Analizar si la prohibición tacita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas.

Estudiar si la prohibición tacita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la gestión administrativa de las universidades públicas, vulnerando su derecho al trabajo.

Precisar si la exclusión de los docentes en la gestión administrativa de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable.

## **1.7. Justificación**

### **Teórica.**

Esta investigación está desarrollada dentro del marco teórico en el cual se integran principios constitucionales, laborales y administrativos, presentes en la actual legislación universitaria, Ley N° 30220, a fin de determinar su incidencia en la vulneración del derecho a la libertad de enseñanza, derecho al trabajo y derecho a la igualdad.

Por ello analizaremos, teorías acordes a cada derecho constitucional, primero las teorías epistémicas que sustentan nuestra posición, como el neo constitucionalismo, la constitucionalización del derecho, la teoría de la justicia propuesta por John Rawls. En el análisis se hará una valoración de la doctrina nacional y extranjera, además de sentencias del Tribunal Constitucional, así como los pronunciamientos de los tribunales judiciales peruanos sobre la temática objeto de estudio.

### **Práctica.**

La investigación aborda en forma directa la correlación de los fenómenos que estarían causando la vulneración de derechos fundamentales, así como contribuir con un estudio actualizado de la actual Ley Universitaria. Esta tesis propone la implementación de medidas proporcionales idóneas y necesarias para la aplicación eficaz de la actual legislación universitaria, Ley N° 30220.

### **Metodológica.**

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque no solo realiza un análisis de las fuentes de información en relación a nuestra problemática, y un análisis de la norma controversial que desde nuestra óptica vulnera derechos fundamentales, sino que utiliza la encuesta, como técnica de investigación para obtener datos con mayor especialización sobre el tema.

### **Social.**

En la reforma de la educación universitaria, un tratamiento especial merecen las universidades públicas, quienes no solo aparecen rezagadas por algunas universidades privadas en cuanto a calidad e investigación, sino que los diferentes escándalos de corrupción por parte de quienes las administraban, hacían cada vez más latente una crisis dentro de estas casas de estudios superiores. Por eso en la nueva Ley Universitaria

se le dedica un capítulo con artículo único, en donde se limita la participación de personal docente en la administración de las universidades públicas.

Es así que, desde el 2014, fecha en se publica la ley 30220, por aplicación del artículo 132° se rezagó la labor de docentes universitarios para la administración de las universidades públicas, se entiende que debido a los actos de corrupción que anteriores docentes cometieron al ocupar puestos administrativos. Sin embargo, ponderando intereses somos capaces de confiar la formación de jóvenes profesionales a docentes universitarios por las grandes cualidades académicas que tienen estos, pero los separamos de la administración de las universidades públicas pese a que cuentan con los mismos conocimientos que podrían ser aplicados para contribuir a la reforma universitaria que todo el país quiere y que los jóvenes necesitamos.

No podemos permitir que, mediante la aplicación restringida de una norma administrativa se limiten derechos constitucionalmente reconocidos como la libertad de enseñanza, derecho a la igualdad, el derecho al trabajo de los docentes universitarios que tengan la capacidad técnica de contribuir en la administración de las universidades públicas. Es por eso que proponemos la derogación del artículo vía acción de inconstitucionalidad.

Una legislación en la que el artículo 132°, no responda a un injustificado trato diferenciado a los docentes universitarios y por supuesto no establezca límites arbitrarios a un derecho constitucionalmente protegido, como lo es el trabajo. Pues la necesidad de profesionales con la capacidad técnica y con la experiencia necesaria para contribuir a la reestructuración de la educación universitaria es muy grande como para ir dejando escapar talento al sector privado.



## **CAPÍTULO 2:**

### **HIPÓTESIS Y VARIABLES**

#### **2.1. Hipótesis General**

La ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas por haber empleado una mala técnica jurídica en su formulación.

#### **2.2. Hipótesis Específicas**

1. El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas por contener una prohibición tacita innecesaria.
2. El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la administración de las universidades públicas por contener una prohibición tacita inidónea que vulnera su derecho al trabajo.
3. La exclusión de los docentes en la administración de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable.

### 2.3. Variables

Variables	Definición Conceptual	Definición Operacional
La ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220.	La redacción de la norma jurídica acarrea a una interpretación ambigua de su objeto regulatorio, lo cual causa perjuicio a los sujetos inmersos en la ley.	Percepción y análisis de la aplicación de la Ley Universitaria que incide en una interpretación diversa.
Derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios.	Derechos humanos positivados, que son reconocidos a todos los catedráticos que ejercen docencia en nuestra legislación.	Frecuencia de derechos constitucionales vulnerados en la aplicación de la ley.

## **CAPÍTULO 3:**

### **METODOLOGÍA**

La investigación científica es un método para resolver un problema desconocido de la realidad; la investigación nos aporta sapiencias, nos ayuda a descubrir principios generales para que esta investigación pueda estar dentro de los parámetros de la ley, permitiéndonos fluir en muchos ámbitos, pero el más importante, el poder llegar al avance de la ciencia. De la misma forma podemos enriquecernos con nuevas técnicas, instrumentos, procedimientos para lograr una investigación profunda.

#### **3.1. Metodología de la Investigación**

La investigación científica posee dos dimensiones complementarias entre sí, debido a que una de ellas responde al cómo realizar la investigación, demarcando el camino a seguir para llegar a la segunda dimensión, en la cual se plasman los resultados del proceso de investigación realizado. Siguiendo lo expresado por J.W. Best, en su libro de gran trayectoria *Como investigar en Educación*, “La investigación es una fase más especializada de la metodología científica” (p.7).

El presente trabajo se ha optado por utilizar una investigación de naturaleza descriptiva, con el atributo de explicar los hechos y fenómenos estudiados. Habiendo elegido este

tipo de investigación, debido a que, el fenómeno estudiado ha sido identificado por la coyuntura actual en la que vivimos muchos universitarios, estableciendo así un espacio – tiempo determinado por la publicación de la Ley 30220.

Las variables de esta investigación son las siguientes:

- VI: La ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220.
- VD: Derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios.

Según su naturaleza, esta es una investigación de enfoque cuantitativo, debido a que, se ha estructurado un problema específico, se han establecido las variables que serán la base para la medición y comprobación de la hipótesis, la cual ha sido planteada como aquella respuesta tentativa al fenómeno estudiado. Para ello hemos utilizado un diseño no experimental, debido a que el fenómeno estudiado, así como los efectos de este ya ocurrieron, por lo cual no es posible manipular la variable independiente, además, por resultar perjudicial para los sujetos que componen la muestra. Asimismo, se ha utilizado un diseño transeccional correlacional-causal, para describir la relación entre la variable independiente y la dependiente.

### **3.1.1. Método y Diseño**

La presente investigación ha aplicado los siguientes métodos:

- El método descriptivo. Estará orientado al estudio de casos, exploraciones, establecer causales y consecuencias de la actual legislación universitaria en relación al docente y sus derechos laborales.
- El método analítico. Servirá básicamente para realizar un estudio exhaustivo de la doctrina jurídica de las instituciones objeto de estudio.
- El método de síntesis. Permitirá determinar los alcances de la incidencia de las instituciones objeto de estudio.

### 3.1.2. Diseño Muestral

Población:

La población es el grupo de casos que por sus cualidades y atributos se ven relacionados directa o indirectamente con los efectos producidos por el fenómeno objeto de estudio, en este caso la unidad elegida para delimitar la población son Abogados con especialización en Derecho Constitucional.

Muestra:

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población (...)” (p. 176)

En la determinación de la muestra óptima, se utilizó el muestreo no probabilístico, eligiendo como criterio principal para la elección de la muestra el conocimiento de los Abogados especialistas en Derecho Constitucional de la especial realidad de la universidad pública.

La muestra ha sido determinada mediante la fórmula de muestreo no probabilística simple utilizada en censos en donde se conoce la población:

$$n = \frac{z^2 pq N}{\varepsilon^2(N-1) + z^2 pq}$$

Donde:

z : Es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la Tabla Normal Estándar ( $90\% \leq \text{confianza} \leq 99\%$ ). Para una probabilidad del 90% de confianza;  $z = 1.64$

p : Proporción de abogados con especialización en Derecho Constitucional varones ( $p = 0.5$ )

q : Proporción de abogadas con especialización en Derecho Constitucional mujeres ( $q = 0.5$ )

$\varepsilon$  : Es el máximo error permisible en todo trabajo de investigación ( $1\% \leq \varepsilon \leq 10\%$ ).  $\varepsilon = 0.1$

n : Tamaño óptimo de la muestra

n = 42

n = 42 Abogados con especialización en Derecho Constitucional.

### **3.2. Técnicas de investigación**

Para realizar el acopio idóneo de datos que contribuyan a validar la hipótesis propuesta para el fenómeno objeto de investigación se emplearon las técnicas:

#### **3.2.1. Encuestas**

Según Naresh K. Malhotra, esta técnica es aplicada mediante una entrevista prediseñada, puesto que, incluye un cuestionario estructurado y diseñado para obtener información específica. En este caso a 42 abogados con especialización en Derecho Constitucional.

#### **3.2.2. El Cuestionario**

Siguiendo lo expresado por Pérez (1991) “es un conjunto de interrogantes que contienen las variables de la investigación en diferentes formas, y que han sido dispuestas sistemáticamente para que nos proporcionen información viable o susceptible de ser cuantificada.”

### **3.2.3. Análisis de registro documental**

Es la técnica en la cual se realizan diferentes operaciones intelectuales orientadas a obtener y representar contenido de un documento en un formato diferente al original a fin de poder identificarlo con facilidad en el futuro.

## **CAPÍTULO 4**

### **ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

#### **4.1. Bases epistémicas**

La teoría que va respaldar nuestra investigación dándole el sustento epistemológico que explique la construcción del conocimiento científico. En otras palabras, la forma como el conocimiento científico se especializa, otorgándole un status de cientificidad, tal como la comunidad científica lo requiere.

La evolución científica y tecnológica, exige una restructuración en los presupuestos que sustentan la epistemología. Por esta razón, el epistemólogo preocupado por la ciencia de su tiempo es sumamente útil para el desarrollo científico, contribuyendo a cambiar positivamente el trasfondo filosófico de la investigación.

Toda modificación que realice un legislador responsable requiere de un fundamento axiológico sólido en la filosofía, la política y la dinámica social. Este fundamento se hace aún más necesario, por encontrarnos en una sociedad globalizada que nos permite conocer diferentes realidades al golpe de un clic, por ello hemos seleccionado los siguientes presupuestos filosóficos



#### **4.1.1. Neo constitucionalismo**

Utilizamos el neo constitucionalismo, porque es la teoría que busca la transversalización de principios constitucionales que se encuentran insertos en nuestra Constitución, como la libertad de enseñanza, la protección al derecho al trabajo y el derecho a la igualdad.

El neo constitucionalismo, según sus máximos exponentes como Prieto Sanchis, Carbonell, Garzón Valdez entre otros, sostienen que dicha teoría toma fuerza al finalizar la Segunda Guerra Mundial, insertando en los cuerpos normativos constituyentes de Italia (1947), Alemania (1949), Portugal (1976), España (1978) y en nuestro ámbito regional, en la constitución de Brasil (1988) y Colombia (1991), sus novísimos preceptos básicos.

Prieto (2003) nos dice: “el neo constitucionalismo nace de la fusión de dos clásicos modelos constitucionales como es el modelo europeo y el modelo norteamericano” (p. 21). En el modelo norteamericano, se desarrolla la idea de constitución en un contexto de igualdad, para que las personas puedan desarrollar sus planes y proyectos de vida, en el marco normativo que propone un Estado equitativo. Por otro lado, los cuerpos normativos europeos proponen una transformación política y social, que se inspira en los presupuestos ya desarrollados por Sieyès, Voltaire y Rosseau, donde prevalecen los valores como la libertad y sobre todo la democracia.

De los diferentes autores estudiados, podemos sintetizar las características más relevantes, que definirían al constitucionalismo:

- El predominio sobre las reglas (Los principios constitucionales).
- La utilización de la técnica de la ponderación de los derechos fundamentales (muy usado por el Tribunal Constitucional)
- La presencia trascendental y activa del Ad quo, por encima del legislador.
- Reconocimiento del denominado pluralismo valorativo en oposición de la denominada homogeneidad ideológica.

- El constitucionalismo horada en todos los ámbitos del derecho (en nuestro caso en el derecho laboral, a la educación, etc.).
- Los pilares del neo constitucionalismo lo constituyen los derechos constitucionalmente reconocidos, en el cuerpo normativo constituyente de cada Estado.

#### **4.1.2. La constitucionalización del derecho**

La Constitución del derecho peruano, como lo expresa César Landa (2013):

“Es un fenómeno cada vez más arraigado en nuestra cultura y contexto jurídico. Tal vez la forma más evidente en la que se haya manifestado sea el creciente protagonismo del Tribunal Constitucional (TC), supremo intérprete de la Constitución, en la significación y reasignación de conceptos, derechos y principios jurídicos que, a través de sus sentencias, han afectado desde el derecho tributario hasta los derechos humanos.” (p. 2)

La cuarta disposición final y transitoria de nuestra Carta Magna precisa que la interpretación, que se realice a los derechos relativos a las libertades personales que hayan sido reconocidas por la constitución, se hará en armonía con los instrumentos internacionales que versen sobre esta materia, tal como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se encuentra ratificada por el Estado Peruano.

Nuestra Carta Magna, establece una jerarquía en las fuentes de derecho que recoge nuestro ordenamiento jurídico y establece sus competencias. A decir de Neves (2004):

“Una doble vinculación con el tema de las fuentes del Derecho, señala el rango de las normas, de manera global (arts. 87 y 51 de las Constituciones de 1979 y 1993, respectivamente), y puntual, norma por norma; y segundo, se configura a sí misma como fuente del Derecho.” (p. 58)

Como se desprende de los autores estudiados, el derecho al trabajo en nuestro sistema jurídico tiene un rol trascendental. Naciendo de aquel acto liminar del pueblo mejicano de 1917, el Derecho al trabajo en Latinoamérica ha recorrido un largo camino de

constitucionalismo laboral, yendo desde lo constitucional nacional a lo supra nacional.

Arese (2014):

“Es un lugar común que Latinoamérica fue adelantada en materia de constitucionalismo social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, conocida como Constitución de Querétaro, fue durante un siglo referencia mundial en materia de elevación de los derechos laborales al máximo nivel de los estados.” (p.2).

Los conocidos arts. 5 y art. 123 con sus treinta apartados, son una auténtica declaración de principios y un *Código Constitucional del Trabajo*, individual y colectivo con alta intensidad y claridad protectoria.

El acto liminar de Querétaro significó una retribución de justicia en las relaciones de trabajo para los revolucionarios mexicanos reivindicando su dignidad humana, señala De La Cueva (1949):

“En el curso de la historia nuestra se fue perfeccionando una idea: primeramente, la exigencia de la independencia frente a un pueblo, admirable por muchos conceptos, pero lejano, así como carente de sentido y del espíritu de la libertad que brota de la tierra, de la selva, de la llanura y de los ríos de nuestra América; después, la libertad del individuo delante del Estado y la supremacía de la nación frente a la Iglesia, finalmente, la dignidad del hombre y su transformación de individuo en persona.” (p.993)

#### **4.1.3. Constitucionalismo social**

“El origen del constitucionalismo social, según los autores clásicos, lo encontramos fundamentalmente en: a) el desarrollo de la organización sindical, y b) la culminación del proceso de dignificación del concepto “trabajo” (Frascarolo. 2011. p. 5.)”.

El constitucionalismo social adquiere auge luego de la primera guerra mundial, mediante la Constitución de México de 1917 (reforma de Chapultepec), que lamentablemente no llega a ser acogida por la Constitución Alemana de Weimar en 1919.

La Constitución Alemana de Weimar, contiene una variedad de lineamientos como la declaración de derechos fundamentales de índole social y económica, tales como el derecho al trabajo, a la educación, a la huelga, a la seguridad social, a la familia, entre otros. Además, desarrolla normativa referida al desenvolvimiento del ser humano en su esfera laboral y la relación entre el trabajador y el empleador, incorpora conceptos como sindicatos, huelga y el rol del Estado en la protección del trabajador.

El constitucionalismo social ha sentado las bases de una nueva sociedad proponiendo la igualdad de oportunidades entre las personas en igualdad de condiciones; además, incorpora instrumentos que permiten el ejercicio real y tutela efectiva.

Ahora como señala Blancas Bustamante (2011):

“Estos derechos, han tenido un profundo cambio, producto del surgimiento del Estado Social, que incidió en la teoría de los derechos fundamentales al modificar, en función del interés social, el concepto de derechos tradicionales como la propiedad, la igualdad y las libertades económicas, así como al reconocer nuevos derechos fundamentales —de contenido social— como los derechos al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social, entre otros.” (p. 5)

Estos derechos fundamentales deben ser tutelados por el Estado, a través de sus diferentes mecanismos de protección que promueve el Ministerio de trabajo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), o en su defecto el trabajador deberá recurrir a los juzgados laborales del Poder Judicial.

#### **4.1.4. Derechos humanos laborales**

La creación de nuevas tecnologías en los últimos años ha incidido en la necesidad de una adecuada y precisa definición del contenido y alcance de los derechos laborales de la persona humana. La protección de estos derechos laborales se le ha confiado al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, los cuales a través de los Juzgados Laborales y el Ministerio

del Trabajo respectivamente, deben promover la igualdad en la ya desigual relación entre el trabajador y el empleador.

Dichos derechos, son consecuencia de una serie de luchas por los mismos trabajadores, para que estos derechos sean reconocidos a nivel internacional, y sean insertados en el derecho positivo y puedan ser objeto de tutela.

Como señala Arese (2014):

“(...) hablar de derechos humanos laborales, son los derechos atinentes a la condición humana y que se van a expresar en la relación empleado-empfeador, en el trabajo independiente, lo que va incidir en el desarrollo específico e integrado de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, un campo en que es posible y necesaria la idea de derechos humanos.” (p. 33)

Por ello dichos derechos, se fundamentan en base a las teorías expuestas en la base epistemológica, como el neo constitucionalismo, “Constitucionalismo social”, Derechos fundamentales de segunda generación. Entre los instrumentos más relevantes sobre los derechos humanos laborales tenemos: La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales adoptada por la IX Conferencia Interamericana de Rio de Janeiro de 1948, la cual integra el pleno de normas supranacionales americanas sobre derechos humanos y, por su riqueza axiológica, se constituyó en un auténtico Código Internacional del Trabajo.

La mencionada Carta de Garantías Sociales declara en su artículo 1° los principios fundamentales que amparan a los trabajadores y estipula los derechos mínimos que todos los Estados Americanos firmantes deben garantizarles. En su articulado prosigue desarrollando temas esenciales como lo son, el contrato individual, colectivo, así como el procesal judicial y administrativo del trabajo y finalmente la seguridad social continental,

llegando a significar una plataforma de acción de notable consistencia a nivel Continental respecto a los derechos de los trabajadores.

Esta Carta de Garantías Sociales luego es acompañada por disposiciones laborales como las contempladas en la Carta de la Organización de Estados Americanos (art. 45) y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

En palabras de Arese (2014):

“Esta trilogía de instrumentos, significó la consagración en normas generales de los Derechos Humanos, la incorporación del Derecho del Trabajo. Este tipo de normas generales sobre derechos humanos laborales, sólo estuvo precedida por la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo de 1943 y se consolidaron a partir de la Declaración Universal de Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948 (arts. 23 y 24) y la posterior Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.” (p.7)

La Constitución Peruana vigente establece en su artículo 51º la primacía de la Constitución, por lo cual es la norma jurídica con mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, señala Loayza (2016):

“En el artículo 105º de la anterior Constitución de 1979, consagraba la jerarquía constitucional de los preceptos contenidos en los tratados de derechos humanos, posee trascendencia doctrinaria, la que ha sido reconocida por especialistas en la materia entre los que podemos citar a Héctor Gros Espiell, Antonio Cancado Trindade. Del mismo modo, dicho artículo ha servido de base para normas similares en las constituciones de Guatemala, Nicaragua, Colombia y Argentina.” (p. 57)

Cancado (1999) destaca la relevancia del:

“Impacto de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en algunas constituciones que han ocasionado grandes transformaciones en los Estados que han repercutido en el plano internacional generando al mismo tiempo un nuevo constitucionalismo, así como una apertura en la internalización de la protección a los derechos humanos.” (p.235)

En este contexto, el Estado Peruano se encuentra obligado a sancionar, prevenir e investigar posibles vulneraciones de derechos reconocidos en los instrumentos

internacionales tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, Carta Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos.

Los Estados parte de estos instrumentos internacionales también se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para no violar directamente los derechos humanos, realizar la determinación del contenido de cada derecho, así como los alcances de cada derecho y las obligaciones de cada autoridad del Estado en el ámbito de su competencia para garantizar las acciones positivas que sean necesarias para que cada persona pueda gozar plenamente sus derechos humanos.

El Estado debe establecer cómo las normas internacionales deben operar dentro del Estado, legislando internamente al respecto estableciendo mecanismos institucionales para reclamar dichos derechos, proponiendo políticas públicas y capacitaciones a los agentes del Estado que, disuadan las amenazas y violaciones de dichos derechos, a fin de remover los obstáculos culturales y sociales.

En general los Estados latinoamericanos han realizado el reconocimiento de un plexo jurídico de Derechos Humanos consagrado en el orden supranacional general, así como dentro de las relaciones de trabajo, lo que significa la aceptación del concepto de Derechos Humanos Laborales, conforme el concepto esbozado por la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 17 de setiembre del 2003, es decir, que “los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más amplio”.

#### **4.1.5. Garantismo social**

Como señaló Luigi Ferrajoli en la edición de Miguel Carbonel (2008):

“El garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe sobre todo a la obra de Luigi Ferrajoli, quien a partir de 1989 ha construido una completa y muy estructurada teoría del garantismo penal.” (p. 25)

En sus trabajos posteriores, tal como señala Miguel Carbonel (2009):

“Ferrajoli ha ampliado su teoría para conformar una especie de teoría general del garantismo, la cual ha vinculado estrechamente con la teoría del Estado constitucional (desde el punto de vista normativo) y con el llamado neo constitucionalismo (desde el punto de vista teórico), desarrollado ampliamente en acápites anteriores.” (p. 2)

Respecto al Garantismo Social, nos dice, el teórico Blancas (2011):

“El reconocimiento de derechos fundamentales sociales, el constitucionalismo social, se vincula, en el plano político, a la transformación del Estado Liberal en Estado Social de Derecho, proceso en el cual la formulación de los derechos sociales e, incluso, la reformulación es la clave social de algunos derechos clásicos, constituye un ingrediente esencial para entender ese fenómeno.” (p. 15)

La base axiológica que sustenta los derechos fundamentales del trabajador es la dignidad humana, de acuerdo a Blancas (2013):

“La cual funda las normas protectoras del trabajador, justifica las prestaciones y obligaciones que el Estado impone al empleador para compensar la desigualdad real entre este y el trabajador y garantiza las libertades de organización, negociación, acción y auto tutela que se reconocen a los trabajadores para obtener un trato digno, mejorar sus condiciones de trabajo y tutelar sus derechos.” (p.40)

Dichas normas son la base jurídica para la tutela efectiva de los derechos, en nuestro caso de los derechos laborales.



#### **4.1.6. La teoría de la justicia de Rawls**

Nuestra investigación ha seleccionado la teoría del Rawls, partiendo del principio fundamental de la justicia para el autor “Cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales compatible con un esquema similar de libertades para otros”, esto no ocurre en el caso de los docentes de universidades públicas, por la prohibición tácita de no participar de la gestión de la universidad pública, disposición que a todas luces genera una serie de vulneraciones de derechos fundamentales.

Rawls (2006) señala “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”, en ese sentido toda norma u organización, a pesar que este, muy bien estructurada si es injusta, tiene que ser descartada o abolida. Además señala que, “la justicia es el principal valor de la sociedad, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas definitivamente”.

Entonces no puede haber ningún tipo de contemplación cuando no se ejerce lo justo, al encontrarnos en una sociedad democrática y constitucional, prima y prevalece la Constitución, por ello nuestro ordenamiento jurídico se orienta al neo constitucionalismo, en donde la supremacía de la justicia es el principal objetivo de la sociedad.

Existen diversos parámetros para señalar que es justo y que es injusto, siendo en el ámbito jurídico, la justicia social, el principal indicador, debido a que, como señala Rawls (2012) “las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social” (p. 20). Además, delimitan cuáles son los derechos y obligaciones que le corresponden a cada individuo en sociedad.

Son diversas concepciones que se dan a la justicia, tantas como posiciones tiene cada autor de lo que se quiere lograr con la justicia. Para Rawls (2006) “el concepto de justicia ha de ser definido por el papel de sus principios al asignar derechos y deberes, y al definir la división correcta de las ventajas sociales” (p. 26), entendiéndose que buscar la justicia equivale a la no obtención de ventajas de una de las partes sobre la otra.

Desde la óptica del utilitarismo encontramos que Rawls (2006) señala “cuando las instituciones más importantes de la sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está correctamente ordenada y es, por tanto, justa” (p. 35). Esta concepción es criticada por el autor, porque si bien defiende el bienestar general, hay una falta de consideración de los derechos civiles y políticos de las personas. Como dice Rawls (2006) “no importa, excepto de manera indirecta, cómo se distribuya esta suma de satisfacciones entre los individuos; tampoco importa, excepto de manera indirecta, cómo un hombre distribuye sus satisfacciones en el tiempo” (p. 37). Es claro que esta teoría al igual que otras concepciones filosóficas busca sentar bases axiológicas sólidas en las cuales se desarrolle un sistema social equilibrado que genere la mayor satisfacción para sus ciudadanos.

De acuerdo a Rawls (2006) en:

“La justicia como imparcialidad, las personas aceptan por anticipado un principio de igual libertad y lo hacen sin un conocimiento de sus fines más particulares. Convienen, por tanto, implícitamente, en adecuar las concepciones de su bien a lo que requieran los principios de la justicia o, al menos, en no insistir en pretensiones que los violen directamente.” (p. 37)

Como apreciamos para John Rawls el concepto de justicia se desarrolla en base al principio de imparcialidad, es así que elabora una teoría en la cual la persona humana sin importar su estado debe desarrollarse con igualdad de oportunidades frente a los demás

integrantes de la sociedad y para lograrlo es necesario que el ordenamiento jurídico propicie la efectiva y real tutela de derechos.

## **4.2. Bases teóricas**

### **4.2.1. Ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220, producto de la mala técnica jurídica**

#### **4.2.1.1. La Universidad**

La universidad es, en sentido de Rueda (1996):

“La palabra universidad deriva del latín universitās magistrōrum et scholārium (comunidad de Profesores y académicos), es una institución de educación superior que está conformada por distintas facultades que conceden diversos grados académicos y títulos profesionales a nombre de la nación. Las universidades pueden contar también diversos departamentos, centro de investigaciones, etc.” (p. 16)

Para Aljovín (2002):

“La universidad como institución social, tiene un rol trascendental en el proceso de socialización de la juventud estudiantil. Forja espacios de intercambio entre diversos sectores sociales, generacionales, de tendencias ideológicas o de género, forzando a cada uno a reconocer al otro como ser humano.” (p. 14)

#### **4.2.1.2. La realidad de la universidad peruana**

Las universidades peruanas a diferencia de las universidades de la región han tenido otro tipo de evolución, por la genuina historia de los peruanos, unas han sido influenciadas años atrás por los partidos de izquierda, otras por los denominados partidos de derecha, otras han evolucionado, pensando en el bienestar y el cumplimiento de los objetivos de la enseñanza universitaria, es claro que esto ha ocurrido en pocas, y otras han

evolucionado por el interés de crecer como empresas, y por lo tanto ser unas organizaciones lucrativas, estas son muchas y sabemos cuáles son.

Sobre esta realidad Mabres (2012) nos dice que en las universidades peruanas existe un bajo nivel académico, que se asocia a la problemática del desempleo, porque el egresado tiene serias dificultades para obtener trabajo, lo cual conlleva a una incertidumbre económica. De igual manera se aprecia una escasa investigación de calidad, y eso se ha visto en las investigaciones, o tesis realizadas por los egresados que muchas veces son copias o no cumplen con la rigurosidad de un trabajo académico.

También se observa muy poca relación de colaboración e interrelación entre las universidades, más bien se observa actualmente una rivalidad que parte desde las autoridades. Esa lejanía también se observa en la relación de la mayoría de las universidades con el sector empresarial.

En el artículo periodístico Yamada (2016) *¿Universidad o instituto? La hora de la reforma de la educación* sobre uno de los problemas de la universidad peruana nos dice:

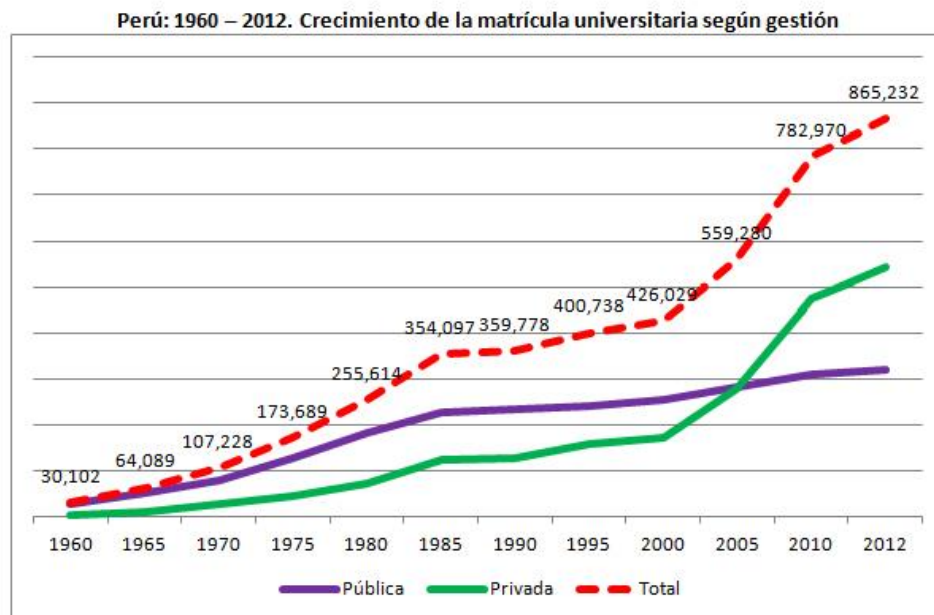
“La creencia de que la educación universitaria supera a otras alternativas de educación superior dista mucho de la realidad. El estudio “Una promesa incumplida. La calidad de la educación superior universitaria y el subempleo profesional en el Perú” encontró que previo al inicio de la reforma de la educación superior, cuatro de cada diez graduados universitarios estaban subempleados en el 2012. El documento resalta que, a pesar del importante crecimiento económico vivido en el país la última década, un importante grupo de profesionales se encontraba sobre educado, subpagado y ocupando puestos laborales para los que no necesita una educación universitaria, como resultado del incremento de universidades de baja calidad en dicho mercado.” (p. 10)

Para una efectiva transformación de la educación superior es necesario reconocer el rol fundamental de la universidad en la sociedad, puesto que, es la fuente de creación de

nuevo conocimiento científico y sin duda la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad.

En el Perú, luego de las crisis afrontadas durante las décadas de los 80 y 90s, se evidenció la expansión de la promoción y acceso a la educación superior universitaria, sobre todo en las universidades privadas, en el gráfico podemos apreciar el crecimiento de la matrícula universitaria, como consecuencia directa de una liberalización económica en dicho mercado.

**Gráfico N° 3**



Fuente: ANR 2012, 2008 / MINEDU 2002

#### **4.2.1.3. La Ley universitaria**

La derogada Ley Universitaria tiene antecedentes y características muy particulares, nos dice Ongaro (2007) al respecto:

“Al iniciar el siglo XX, la Universidad seguía siendo colonial. Se llevó a cabo la Reforma Universitaria, otorgándole autonomía universitaria para modernizarla, la que se realizó parcialmente en las décadas de los años 40 y 60. Luego vino el estancamiento y el atraso más

absoluto. En los años 80 y 90 se pasó a intervenir militarmente, recesar y ahogar económicamente a las universidades. Al iniciar el siglo XXI, 6 de las 28 universidades públicas estaban intervenidas por «Comisiones Reorganizadoras» que luego de muchos años de intervención, han dejado agravado los problemas de tales universidades. Mientras se da una proliferación de universidades privadas (de 12 pasaron a 44, entre 1990 y el 2000), con tendencia a elitizar y mercantilizar aún más la educación superior.” (p. 20)

La derogada Ley N° 23733, Ley Universitaria, promulgada el 9 de diciembre de 1983, legislación expedida mientras estaba vigente la Constitución de 1979. En el contexto de esta Ley, la mayoría de universidades no han brindado una sólida formación profesional olvidándose de uno de los fines más importantes de la educación universitaria, la cual es, la investigación científica y tecnológica, esta situación ha sido descrita en la Exposición de Motivos de la Ley 30220, pues:

“Diversos factores que impiden su normal desarrollo tales como: la falta de renovación de programas curriculares de estudios, falta de capacidad gerencial de sus autoridades para generar ingresos propios, falta de incentivo al espíritu de investigación en los estudiantes y profesores y la falsa interpretación de lo que es autonomía universitaria patrocinados por sectores politizados, entre otros.” (Congreso 2006, p.3)

Lo más criticado de la derogada Ley Universitaria era el modo de elección de las autoridades universitarias, esto es Rector, Vicerrectores, Decanos, los miembros del Concejo de Facultad y Universitario, puesto que, eran los docentes universitarios quienes monopolizaban el voto en estas elecciones, de esa manera se forma una suerte de “clientelaje” intercambiándose puestos por votos o por una mayor remuneración.

Este fenómeno logró formar grupos de interés que se repartían los diferentes puestos en la administración de la Universidad, lo cual tenía dos consecuencias directas; la primera, que se susciten diferentes actos de corrupción y de una manera organizada, afectando recursos económicos destinados a mejorar la educación de los jóvenes universitarios, la cual es precisamente la segunda consecuencia, el desmedro en la calidad universitaria, en perjuicio de los estudiantes.

#### **4.2.2.4. Motivos de la Ley 30220**

El gobierno del ex presidente Ollanta Humala promulgó en julio del 2014, la Ley 30220, la cual tuvo como objetivo ordenar la actividad universitaria que se encontraba sin ningún tipo de supervisión efectiva.

Esta reforma universitaria incluyó, entre otras, la creación del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el lanzamiento del observatorio sobre oferta formativa y demanda laboral “Ponte en Carrera”, teniendo como corolario la promulgación de la nueva Ley Universitaria. Dicha norma dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores y de su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU).

Los motivos para una novísima legislación universitaria, eran diversos, pero indudablemente, el tema, más trascendental, era la calidad de la educación universitaria, que en un alto porcentaje tenía niveles de escándalo, para Yamada (2016):

“La heterogeneidad en la calidad, pertinencia y retorno social de la formación universitaria, sacada a la luz por los estudios anteriores, propició un debate nacional sobre el tema que generó nuevas políticas: se ha aprobado una nueva Ley Universitaria (Ley 30220), que reforma el funcionamiento de las universidades; se ha creado una nueva institucionalidad de regulación, con la puesta en marcha de Sunedu; y se han sacado adelante observatorios laborales inéditos en el país, como Ponte en Carrera.” (p.8)

Tenemos que reconocer que la Ley Universitaria busca niveles básicos de calidad, como señalaba el ex ministro de Educación Saavedra (2016), en su oportunidad, “el fondo de la Reforma es tener mecanismos para asegurar que todas las universidades cumplen con niveles básicos de calidad”, “Ya no es un tema solamente de si la ley se está cumpliendo

o no. Si no que el tema crucial es promover una mejora continua de la calidad de la oferta pública” (p. 6).

Es claro que la mejora en la calidad universitaria dependía de un factor muy importante, erradicar a los grupos que ostentaban el poder al momento de la reforma educativa, los cuales estaban inmersos en diferentes actos de corrupción, para esto se tomaron medidas como evitar la reelección inmediata de los Rectores y Decanos que estaban en el cargo y la más importante hacer que las elecciones para elegir a las autoridades universitarias sean mediante voto universal, con lo cual se incluye en la fórmula electoral a los estudiantes, quienes son los principales interesados en mejorar la educación universitaria.



## Modificaciones que trae la nueva norma

La Ley Universitaria ya entró en vigencia y establece plazos para que las casas de estudios superiores se adecúen a ella. Hay nuevos requisitos para designar a los profesores y elegir a las autoridades. Son 133 artículos, además de disposiciones complementarias transitorias, que regularán la vida universitaria.

### EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

#### Los requisitos para ser profesor:

Para enseñar en pregrado, el docente debe tener grado de maestro.

Para enseñar en maestrías y programas de especialización, el docente debe tener grado de maestro o doctor.

Para enseñar en doctorados, el docente debe ser doctor.

Los docentes extraordinarios pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de educación superior. Sus características son establecidas por los estatutos de cada institución.

#### ¿Y cómo se elige a las autoridades?

El rector y los vicerrectores de las universidades públicas son elegidos por cinco años por votación universal de todos los docentes y estudiantes: A los profesores les corresponde dos tercios de la votación y a los alumnos matriculados un tercio.

La elección es válida si participan en el proceso más del 60% de docentes y más del 40% de alumnos. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el 50% + 1 de los votos válidos.

El rector y los vicerrectores no pueden ser reelegidos inmediatamente ni participar en lista alguna.

El decano es elegido por cuatro años y no hay reelección inmediata. También es elegido por votación universal.

### ADECUACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS A LA LEY



A la entrada en vigencia de la ley, cesa la Asamblea Universitaria y quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación de personal en las instituciones públicas.



A diez días de la entrada en vigencia de la norma, se forma en cada universidad pública y privada un Comité Electoral Universitario Transitorio, integrado por seis docentes y tres alumnos.



Este comité convoca y conduce la elección de los miembros de la Asamblea Estatutaria, que está formada por 20 profesores, entre principales y asociados, y 12 alumnos.



La Asamblea Estatutaria tiene un plazo de 55 días para adecuar sus estatutos a la ley.



Luego, la asamblea debe convocar a nuevas elecciones de autoridades solo en las instituciones públicas.

En el caso de las universidades privadas, la asamblea puede ratificar a su rector, vicerrectores y decanos o llamar a comicios. Todo el proceso se realizaría en aproximadamente tres meses.

Fuente: Diario El Comercio (2014)

#### **4.2.2.5. Características de los profesores universitarios, en la ley universitaria**

La ley 30220, establece en su artículo 45 que, los docentes que impartan sus conocimientos en aulas de pregrado deben tener el grado de magister y contar además con el requisito mínimo de créditos y horas lectivas. Además los catedráticos tienen que dominar un idioma extranjero o lengua nativa, dentro de los cuales se recomienda el conocimiento del inglés, quechua o aimara.

Se había previsto además que, los profesores universitarios no podrán superar los 70 años de edad, requisito que está próximo a ser modificado por ser otro tema de controversia. Actualmente los docentes que superen esta edad deberán ser contratados como docente 'extraordinario', estando prohibidos de asumir cargos como rector o de decano.

Sobre el objeto de análisis de la tesis, nos reafirmamos que la interpretación literal del artículo 132º es manifiestamente contraria a lo que el ordenamiento jurídico peruano y en específico el derecho laboral, puesto que el tenor del artículo vulnera sin un fundamento idóneo, proporcional y razonable los derechos fundamentales de los docentes y al igual que los otros artículos cuestionados el Tribunal Constitucional deberá determinar su constitucionalidad.

#### **4.2.1.6. Técnica legislativa**

Gretel (1989), define a la técnica legislativa “en sentido lato, es el estudio de la composición y redacción de las leyes y disposiciones jurídicas” (p.151).

La doctrina ha brindado diferentes conceptos al respecto, todos tienen por objeto delinear en mejor forma la incidencia de la técnica legislativa en creación de normativa jurídica

eficiente. Sainz, citado por Camposeco (2010) nos dicen que “el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien estructurada, que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios generales de derecho.” (p.20).

De lo expuesto se deduce, que la llamada técnica legislativa tiene como objetivo, darle calidad y homogenización a la legislación jurídica en dos puntos trascendentales: su composición o estructura formal y su redacción o lenguaje.

Para Camposeco, (2010):

“Es el conjunto de principios jurídicos, postulados constitucionales, conocimientos de la legislación vigente, experiencias parlamentarias, a todo lo cual deben sumarse los usos, prácticas, costumbres y precedentes del derecho reglamentario que las asambleas han acordado a lo largo de su historia como poder legisferante, productor de derecho positivo y vigente.” (p.14).

La definición que consideramos más afín a esta investigación es la formulada por Manuel Atienza (2000), quien indica que:

“Constituye el conjunto de recursos y procedimientos para elaborar un proyecto de norma jurídica, bajo los siguientes pasos: primero, la justificación o exposición de motivos de la norma y, segundo, la redacción del contenido material de manera clara, sencilla y accesible a los sujetos a los que está destinada.” (p. 46)

Siendo el instrumento de creación normativa.

#### **4.2.1.7. Técnica legislativa en la ley N° 30220**

La Ley 30220, Ley Universitaria, que trae diversas innovaciones sobre la correcta regulación del quehacer universitario. El contenido de la ley, ha sido objeto de diferentes cuestionamientos:

### **Tesis, para graduarse**

Se eleva la calidad del alumno que va ser profesional, la obtención de la carrera profesional, se obtiene con un trabajo de investigación, porque con una investigación rigurosa como es la tesis, se pone a la investigación en la posición que debe tener.

### **Idioma para obtener título**

En un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, es imperativo que los profesionales tengan conocimiento básico, por lo menos de un idioma, como lo indica la propia Ley se le da una preferencia al inglés, por ser un idioma universal, aunque se promueve también el uso de otros idiomas.

### **Graduación en la misma universidad**

Con la legislación anterior el alumno podía graduarse en una universidad distinta a la que había estudiado, situación que se podía prestar a una serie de cuestionamientos, como una verdadera rigurosidad al obtener el título, situación que no podría suceder en la misma universidad.

### **Docentes que tengan más de 70 años no podrán enseñar**

Totalmente en desacuerdo, porque se vulnera el derecho fundamental a la igualdad con esta medida, pues la capacidad intelectual que tiene todo profesional debe ser transmitida a las nuevas generaciones y la edad no siempre les impide transmitir esos conocimientos.

### **Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)**

Dicha norma dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores y de su

Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), con el objetivo de elevar la calidad de la educación superior, la misma que ha dictado nuevas medidas y requisitos para obtener el título profesional.

### **El rol del Ministerio de Educación**

El Ministerio de educación ya no es la entidad rectora en el ámbito de las universidades, espacio en el que ya había perdido su protagonismo con la Ley anterior. A pesar de las limitaciones, el Ministerio de Educación, era la institución llamada a realizar las políticas públicas a favor de las universidades.

### **Meritocracia en Sunedu**

Idónea propuesta de concurso público del nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de Sunedu. De acuerdo a la ley vigente, la Sunedu está conformada por un superintendente, un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y cinco miembros nombrados por concurso público: dos docentes que hayan trabajado en universidades públicas y uno, en una universidad privada. Además, se incluye a dos personalidades idóneas.

#### **4.2.1.8. Experiencia comparada**

En nuestro país vecino del sur, en Chile, en Julio del 2016, se introdujo una nueva reforma en los estudios superiores, donde se da paso a una nueva institucionalidad, porque se busca establecer un sistema de educación superior en Chile, que estará compuesto por instituciones de educación superior, estatales y privadas, con un marco regulatorio común.

Tal como lo expresa la nota de prensa de la Cámara de Diputados de Chile (2017) “proyecto especifica los diversos principios que deberán regir al sistema: autonomía; calidad; cooperación y colaboración; diversidad de proyectos educativos institucionales; inclusión; libertad académica; participación; pertinencia; respeto y promoción de los derechos humanos; transparencia; trayectorias formativas y articulación; y acceso al conocimiento” (10 de julio).

La Superintendencia de Educación Superior viene jugando un rol clave en la fiscalización del sistema universitario, así como el Consejo para la Calidad de la Educación, que ha reemplazado a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Sin embargo, no se ha restringido la participación de los docentes en la administración y gestión de las universidades públicas, por el contrario, con su participación se ha logrado fortalecer la institucionalidad en la Universidad.

#### **4.2.2. Derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas**

##### **4.2.2.1. Derechos de las personas**

Respecto del tratamiento legal de los derechos de las personas en nuestro medio, se cuenta en la actualidad con una regulación doble, en la que los diversos derechos civiles o comunes son tratados a su vez como fundamentales. La razón de esta situación es que, el Título Preliminar del Código Civil, al igual que otras legislaciones extranjeras que han influenciado nuestra normativa (particularmente Francia, Italia y Alemania, en ese orden), precedió a la Constitución y fue concebido como la norma de derecho común fundamental; por lo tanto, fue al interior de las legislaciones civiles, y no de las constituciones, que se desarrolló originalmente la regulación de los derechos mencionados.

Ahora, como es fácilmente advertible, las regulaciones de los derechos civiles en el Código Civil y la Constitución no son uniformes, destacándose que la regulación constitucional es más amplia en cuanto al número de derechos contemplados, e incluso en cuanto al desarrollo específico de estos en varios supuestos; un ejemplo claro es el tratamiento del derecho a la libertad en la Constitución y su escasa regulación en el libro I del Código Civil.

De cualquier forma, es claro que en este aspecto no puede hablarse de una relación de complementariedad entre ambas normativas, sino evidentemente de una doble regulación asistemizada, generado en parte, por el hecho de que Código Civil nació bajo la vigencia de otro texto constitucional y, debe decirse también, por el continuo avance en nuestro medio de cierta tendencia del Derecho Constitucional que apunta hacia la constitucionalización de cada vez más regulaciones jurídicas.

#### **4.2.2.2. La libertad de enseñanza**

##### **4.2.2.2.1. Definición y alcances**

Es reconocida como aquella libertad constitucionalmente reconocida, cuyo contenido tiene una doble concepción, la primera se refiere a la libertad de enseñar, mientras la segunda es la libertad de aprender, sin mediar imposición u obstrucción alguna por parte de las instituciones estatales que detentan el poder. En sentido estricto se incluye en esta la libertad de cátedra. La cual reconoce el derecho del docente a exponer sus conocimientos sin sujeción alguna a doctrinas impuestas por el Estado. Asimismo, contiene la libertad de promover la educación, no debiendo limitarse este derecho al de crear establecimientos de enseñanza, sino debe entenderse en sentido amplio, a la

facultad que tiene toda persona de enseñar, lo cual será materia de una próxima investigación.

Como apunta Camacho (1998) “La libertad de enseñanza es aquel derecho de las entidades educativas a crearse mediante la acción estatal o la iniciativa privada, comprendiendo a los diferentes niveles educativos: primario, secundario, técnico y superior” (p. 12). Este derecho es recogido en el artículo 13 de la Constitución y estimamos que su alcance es aplicable a esta investigación.

La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge en su artículo 26 el libre acceso a la educación en todo su nivel, señalando, además que el principal objetivo de este derecho es el desarrollo de la personalidad humana y habla también de la libertad de enseñanza.

#### **4.2.2.2.2. Libertad de cátedra**

“La libertad de cátedra habilita al docente universitario a desdeñar los mandatos emanados de cualquier estructura de poder, orientados a divulgar una ideología oficial, así como a plantear criterios informativos y técnicos acorde con sus propias convicciones; ello sin menguar el respeto a las creencias ajenas.” (Exp. N° 4232-2004-AA/TC, Tacna. Sentencia del Tribunal Constitucional. Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2005).

Esta libertad viene siendo el remedio intelectual para hacerle frente a la imposición de dogmatismo por parte del Gobierno o de los dueños de las Universidades Privadas. El ejercicio de esta libertad ha tenido como consecuencia la discrecionalidad en la formulación de la currícula universitaria. Sin embargo, como lo señala Bernal (1996) “dicha capacidad de autodeterminación no tiene carácter absoluto, ya que debe guardar



correspondencia con el Estado del curso y a lo que una disciplina apuesta en concordancia con el plan general de estudios”.

El derecho a la libertad de cátedra es de carácter bidimensional, debido a que le confiere al docente la libertad de pensamiento en ejercicio de la docencia dentro de las aulas y además lo protege, e incluso alienta, el ejercicio de su derecho a discrepar respecto al pensamiento de sus colegas o alumnos. Pues como bien afirma León (1990), “(...) consiste en la potestad de opinar sin restricciones sobre las materias de los cursos, debiendo respetarse las posiciones discrepantes”.

La libertad de cátedra implica necesariamente cumplir con el deber jurídico de respetar posiciones teóricas e ideológicas diferentes, promoviendo el rechazo a conductas intolerantes. Por supuesto es menester tener en cuenta que, cada institución universitaria, en especial las particulares, ha sido creada sobre una estructura axiológica propia, la cual también debe ser respetada y tomada en cuenta tanto por el discente como por el docente al momento de decidir formar parte de estas instituciones.

#### **4.2.2.3. Derecho a la igualdad**

La igualdad, no solo es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Peruana, sino también recogido como un principio transversal en creación e institucionalización del Estado Social de Derecho. La Constitución la desarrolla en el inciso 2 del artículo 2. El Tribunal Constitucional considera que:

“(...) contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no solo consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo respecto de quienes se encuentran en una idéntica situación.” (Exp. N° 0048-2004-PI/TC, fundamento 59).

Además, el Tribunal Constitucional asevera que:

“No toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables.” (Exps. N°s 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC (acumulados), fundamento 20).

Por lo expuesto en las diferentes Sentencias del Tribunal Constitucional al hablar de igualdad no nos referimos en lo absoluto al concepto de uniformidad, por el contrario, el Estado y su ordenamiento jurídico tiene claro que no todas las personas integrantes de la sociedad peruana se encuentran en condiciones uniformes. Por ello ha establecido que para determinar si nos encontramos frente a un trato desigual arbitrario, antojadizo e injustificado y, por tanto, discriminatorio este no debe tener una justificación objetiva y razonable.

En el ámbito constitucional, siguiendo lo dicho por Hernández (2010), el derecho a la igualdad posee dos dimensiones, la primera es la igualdad ante la ley, la cual implica que la aplicación de la norma jurídica debe realizarse con homogeneidad a todas las personas que se encuentren dentro del supuesto aplicable de la norma jurídica; la segunda dimensión es la igualdad en la ley, cuyo contenido desarrolla que las interpretaciones que realicen los Jueces para decidir sobre causas homogéneas debe ser la misma, generando en los órganos jurisdiccionales la obligación de fundamentar razonable y suficientemente su posición cuando considere que debe apartarse de sus precedentes.

Los conceptos de diferenciación y discriminación han sido bien desarrollados por el Tribunal Constitucional en base a postulados constitucionales que marcan la línea entre uno y otro. Por lo que, nos encontraremos en muchos casos en los que si bien hay un trato diferenciado este no se constituirá en un trato discriminatorio, esto sucederá cuando el trato diferenciado se funde en causas objetivas y razonables.

Debe también, tenerse en consideración que como se estableció en la Sentencia N°0018-2003-AI/TC, “(...) no se considera como discriminaciones aquellas acciones legislativas que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades, a condición de que dicha acción afirmativa esté sujeta a la regla de temporalidad”. Por lo que resulta necesario analizar la idoneidad, la necesidad, la ponderación o proporcionalidad, la razonabilidad y la temporalidad de la prohibición que establece el artículo 132° de la Ley Universitaria.

#### **4.2.2.4. Derecho al trabajo**

Nuestro Colegiado Supremo ha desarrollado en la Sentencia N° 01652-2012 dos aspectos del derecho al trabajo, primero el acceder a un puesto de trabajo y segundo el derecho a no ser despedido sino por causa justa. De acuerdo a Arce (2013):

“El derecho al trabajo, según este instrumento internacional, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones, de manera particular: (...) d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.” (p,3)

Al revisar nuestra historia constitucional, encontramos que en la Constitución de 1979, ya se reconocía al trabajo como un hecho social y económico, he ahí la gran importancia de este derecho dentro del marco normativo social y jurídico peruano.

Entre los diversos principios e instituciones que protege nuestra Constitución, están la estabilidad laboral, indemnización por despido arbitrario, así como la protección general de los derechos laborales y cuando esto no ocurre estamos ante la vulneración de derechos fundamentales, lo cual hace que recordemos los postulados propuestos por el neo constitucionalismo y que hemos desarrollado anteriormente.

Nuestra vigente Constitución Política del Perú desarrolla en su artículo 22 el alcance del derecho al trabajo, considerándolo como un deber y un derecho que además es uno de los del bienestar social y desarrollo de la persona. En menester precisar que, si bien su importancia no está en discusión, aún no se ha logrado el consenso necesario en el Congreso de la República respecto a la promulgación de una Ley General de Trabajo que regule de manera más ordenada y eficiente la protección a la madre gestante, al trabajo de menores de edad o el acceso al trabajo de personas discapacitadas.

#### **4.3. Proporcionalidad de la prohibición contenida en el artículo 132° de la Ley Universitaria**

En este apartado analizaremos si la prohibición a los docentes universitarios de participar en la gestión administrativa de la universidad pública es contraria al derecho a la igualdad, partiendo de los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias y entendiendo que los fines de la cuestionada prohibición son mejorar la calidad universitaria y evitar la comisión de actos de corrupción en la gestión administrativa de la universidad pública.

El análisis se realizará aplicando la técnica de ponderación, la cual es muy usada por el Tribunal Constitucional para resolver controversias donde exista un conflicto entre dos o

más derechos fundamentales. La técnica de ponderación busca estimar la valoración ideal de un principio jurídico cuando este colisione con algún otro, a fin de determinar cuál de estos genera un mayor grado de satisfacción para el idóneo funcionamiento del ordenamiento jurídico.

Debemos precisar que, si bien la prohibición que contiene el artículo en análisis no infringe el principio constitucional de Generalidad de las normas, el cual se infiere de lo establecido en el artículo 103° de la Constitucional, es menester determinar si la exclusión es idónea, objetiva, razonable y necesaria para lograr la finalidad pretendida por el legislador.

#### **4.3.1. Análisis de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la gestión de la universidad pública, frente a la mejora de la calidad universitaria**

Habiéndose identificado claramente que la mejora de la calidad universitaria es una de las finalidades constitucionales que justifican la prohibición a los docentes universitarios, no se logra determinar la existencia de una relación de causalidad clara entre esta y el medio adoptado por el legislador para justificar la prohibición a los docentes, tal como exige el fundamento N° 23 de la STC 0850-2009-PA/TC.

Esto se debe a que si bien, la crítica en la comunidad a aquellos docentes que descuidaban la cátedra cuando comenzaban a ocupar cargos administrativos dentro de la Universidad era muy frecuente, son muchos los factores que pueden devenir en el mismo resultado. Por lo que la evaluación constante a todos los docentes o encuestas a los estudiantes terminan siendo medidas igualmente idóneas. Además, excluirlos terminaría deviniendo en una contradicción, puesto que se le confía al docente universitario la

formación de las nuevas generaciones de profesionales, sin embargo, se le excluye de la gestión administrativa de la universidad pública donde su aporte es igual de valioso.

Es claro que los conocimientos impartidos en las aulas, así como la experiencia profesional de estos docentes pueden contribuir favorablemente a la mejora de la calidad universitaria dando un mejor servicio a los estudiantes. Otro factor a tomar en cuenta es que con la prohibición a los docentes universitarios se estaría beneficiando solo a los estudiantes de universidades privadas con valiosa experiencia en la gestión pública, lo cual supondría un trato desigual injustificado respecto a los estudiantes de universidades públicas. Por lo expuesto consideramos que la medida restrictiva no resulta ser la idónea para lograr el objetivo constitucional propuesto por el legislador.

Respecto a la necesidad de la prohibición a los docentes, estimamos que existen medidas alternativas igualmente eficaces que contribuyan a mejorar la calidad universitaria, sin vulnerar los derechos de los docentes universitarios, como lo son la reducción en la carga horaria de los docentes que participen en la gestión administrativa de la universidad o la programación de sus clases en un horario que no colisione con sus labores administrativas, todas estas sin vulnerar ninguno de sus derechos.

#### **4.3.2. Análisis de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la gestión de la universidad pública, frente a evitar la comisión de actos de corrupción en la gestión administrativa de la universidad pública**

Los hechos de corrupción suscitados en los últimos años dentro de las universidades públicas han sido un factor del que poco se habló en el debate parlamentario, sin embargo, a lo largo del articulado de la Ley 30220 se logra identificar que las

modificaciones claves están orientadas a erradicar dichos actos de corrupción y en algunos casos a prevenirlos, consolidando de esta manera el principal objetivo que es establecer estándares mínimos de calidad en el servicio universitario.

Como es conocido con la anterior Ley Universitaria la elección de autoridades universitarias solo la realizaban los docentes, eligiendo estos primeros a los Decanos de cada Facultad y luego siendo los Decanos quienes terminaban eligiendo al Rector y Vice Rectores, tal como lo disponían los artículos 29° y 37° de la Ley N° 23733. Esta forma de elección hizo que durante muchos años se formaran grupos de interés dentro de las universidades, dándose a lugar a un fenómeno conocido como clientelismo al intercambiarse votos por mejores posiciones dentro de la gestión administrativa de la Universidad, lo cual terminaba siendo el nicho perfecto para la comisión de actos de corrupción y por ende un perjuicio en la calidad de los servicios brindados por la universidad pública.

Para bien, en la Ley 30220 se incorporó en el artículo 66° la elección de las autoridades universitarias mediante voto universal, medida que en nuestra opinión es la modificación idónea para luchar contra la corrupción en la administración de las universidades públicas, dando de esta manera a docentes y a alumnos real representación en el Consejo Universitario. Esta modificación rompe con la concentración de poder que detentaban los docentes y le resta valor a su voto, el cual utilizaban como moneda de cambio para obtener favores de los candidatos a autoridades universitarias.

Por esto último es que el voto universal termina siendo la medida idónea y necesaria para romper las redes de corrupción formadas por los docentes que ofrecían sus votos a cambio de favores. Encontrando en la prohibición impuesta por el artículo 132° una

medida radical que restringe los derechos de los docentes universitarios de una manera desproporcionada y que además no se condice con el tratamiento de la corrupción en el ordenamiento jurídico peruano.

Como lo ha expresado Claus Roxin (2017) en una entrevista que le realiza el diario El Tiempo de Colombia, denominada 'El populismo punitivo es una tendencia errada en todo el mundo', el camino para una efectiva lucha contra la corrupción es la implementación de políticas públicas, entre las cuales deben destacar las dirigidas a potenciar la Gerencia del Potencial Humano de las entidades públicas, para así mejorar el perfil de los profesionales que ocupan cargos públicos; la mejora de los protocolos en el órgano encargado de las contrataciones de una entidad del Estado para la correcta aplicación de las normas de contratación; la mejora de los procesos de gestión de recursos enfocados en los ejes transversales de modernización y eco eficiencia permitirían una administración eficiente de los recursos públicos en las entidades del Estado. Por lo que debemos enfocarnos en la mejora del sistema, en lugar de promover prohibiciones a las personas por condiciones específicas, limitando sus derechos de manera irracional e inidónea y por ende desproporcional.

### **2.3.3. Análisis de la temporalidad de la prohibición a los docentes universitarios de participar en la administración de las universidades públicas**

La Constitución exige que todas las personas que se encuentren en igualdad de condiciones deben ser tratadas como iguales. Es así que, el Tribunal Constitucional ha establecido que la igualdad es un principio-derecho del que gozan todas las personas y por el cual se rige el funcionamiento del Estado en su conjunto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el Tribunal Constitucional en la STC N° 018-2003-AI/TC,



ha establecido que “(...) no se considera como discriminaciones aquellas acciones legislativas que establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover igualdad real de oportunidades a condición de que dicha acción afirmativa esté sujeta a la regla de temporalidad”.

Aun cuando no es la posición de esta tesis el considerar, a la prohibición a los docentes universitarios, como una medida que tiene por objeto promover una igualdad real entre aquellos que ocupen cargos en la administración de la universidad pública, se aprecia que la misma carece del factor de temporalidad establecido por el Tribunal, por lo cual incluso bajo el supuesto que se considere razonable, idónea, necesaria y proporcional la prohibición debe reformarse en el artículo de análisis.

#### **4.4. Bases legales**

##### **Antecedentes:**

- Ley 23733, Ley Universitaria, y sus modificatorias.
- Ley 26439, Ley que crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), y sus modificatorias.
- El Decreto Legislativo 882 en lo que respecta al ámbito universitario, con excepción de los artículos 14º, 16º, 17, º 18º, 19º, 20º, 21º y 22º, y demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

##### **Vigentes**

- Constitución Política de 1993.
- Ley N° 30220. Ley Universitaria, publicada el 9. 7.2014

- Normas Reglamentarias de la Ley N.º 30220, aprobado por Decreto Supremo N.º 006-2016-EF, publicado el 23.1.2016 (en adelante, Reglamento de la Ley Universitaria)

## **CAPITULO 5**

### **PRESENTACIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.1. Resultados**

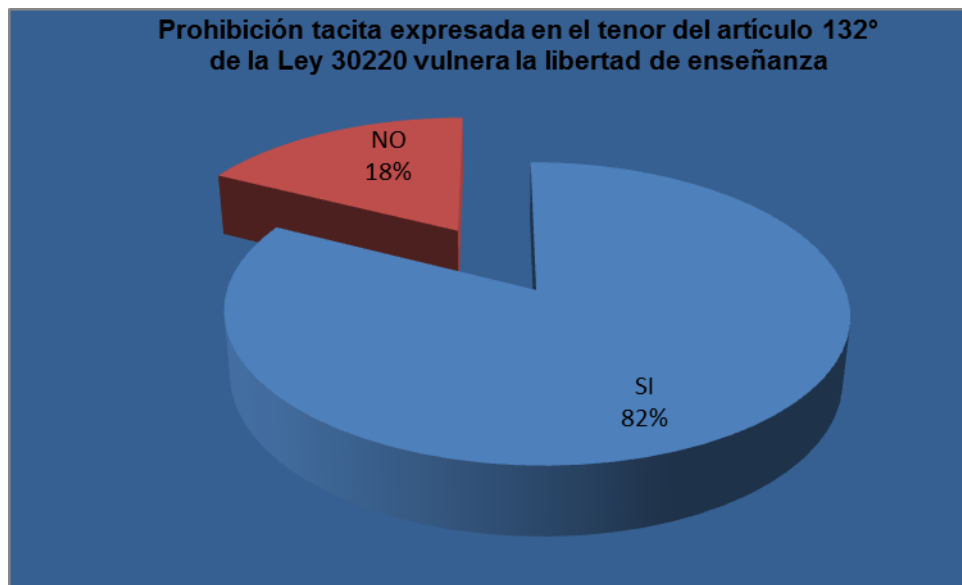
Encuestas realizadas a los abogados con especialización en Derecho Constitucional, conocedores de nuestra problemática:

**Tabla Nº 1**

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: En su opinión: *¿La prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	82.5	82,50	82,50	82,50
	NO	17.5	17,50	17,50	17,50
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 1**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

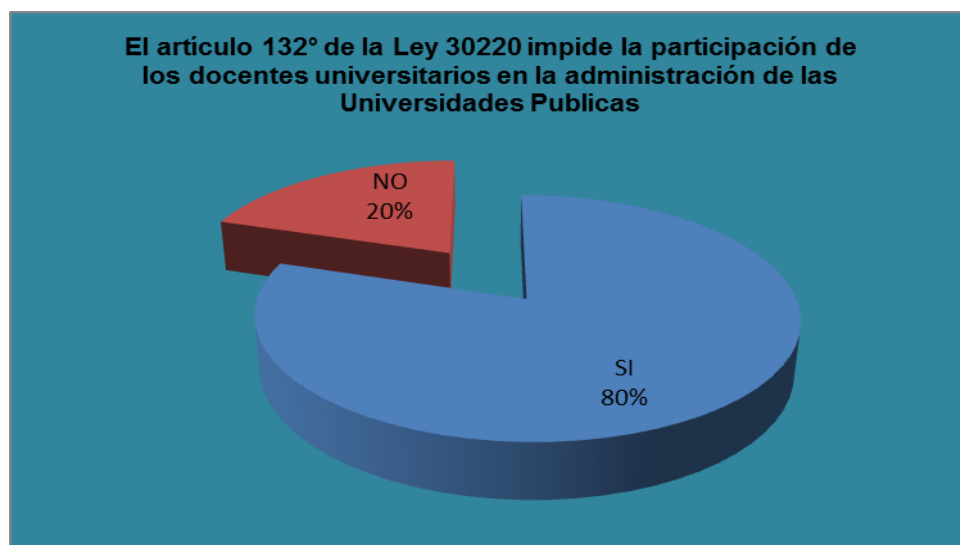
Podemos percibir en el gráfico N° 1, que de los 42 encuestados; el 82% está totalmente de acuerdo, por ello ha dado una respuesta positiva ante la interrogante planteada, hay una respuesta contraria en desacuerdo de 18%, que no está acorde con la afirmación que la prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas.

**Tabla N° 2**

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: ¿La prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la administración de las universidades públicas, vulnerando su derecho al trabajo?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	80	80,0	80,0	80,0
	NO	20	20,0	20,0	20,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 2**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

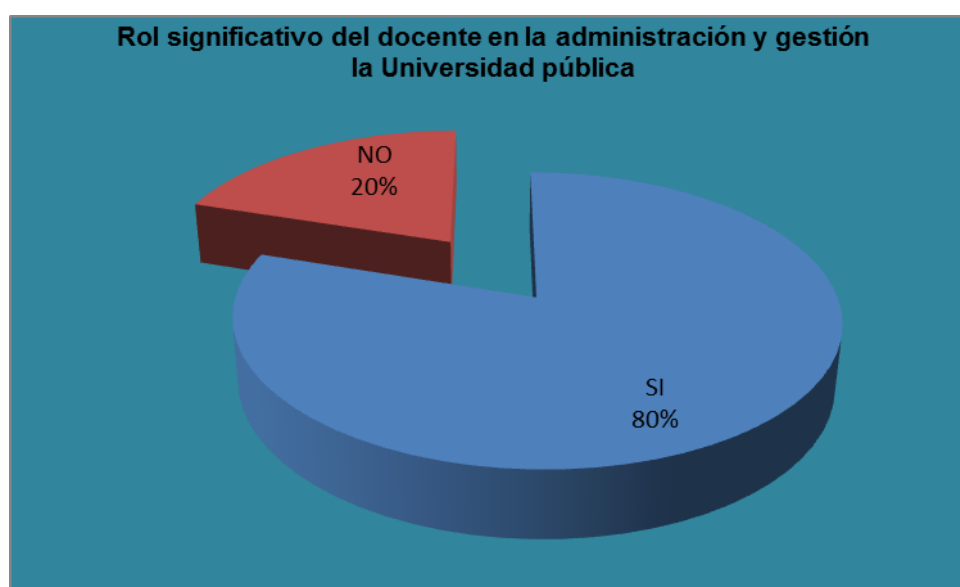
La respuesta porcentual de la premisa donde se considera que la prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la administración de las universidades públicas, vulnerando su derecho al trabajo, ha sido un contundente 80%, que está totalmente de acuerdo, la respuesta contraria es un 20% que no está de acuerdo.

**Tabla N° 3**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: *¿Está de acuerdo que el Docente Universitario, no solo es aquel profesional capaz, de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino que también puede cumplir un rol significativo en la administración y gestión de las universidades públicas?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	80	80,0	80,0	80,0
	NO	20	20,0	20,0	20,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 3**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

## Interpretación

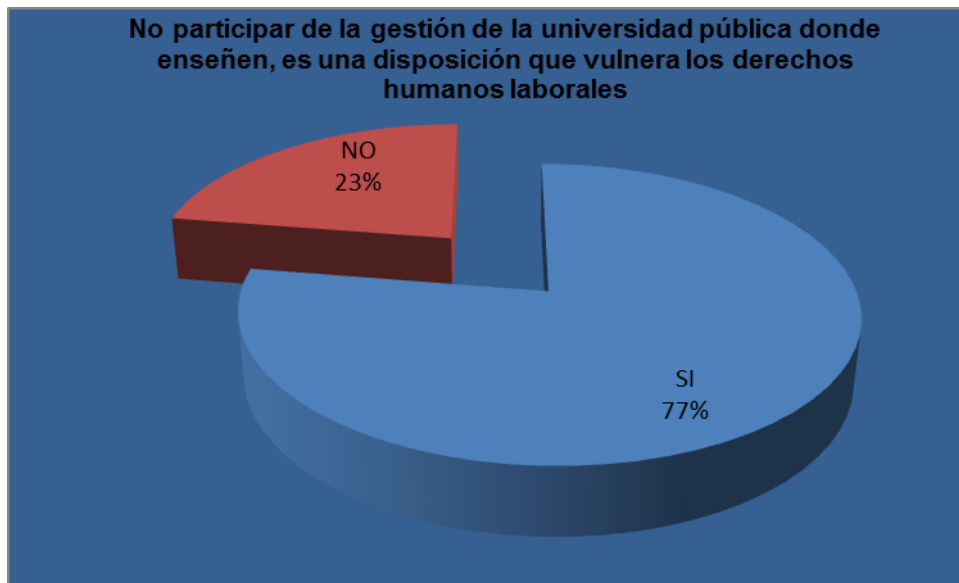
Se desprende de los resultados de la encuesta, al igual que la respuesta anterior el 80%, está totalmente de acuerdo que el Docente Universitario, no solo es aquel profesional capaz, de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino que también puede cumplir un rol significativo en la administración y gestión la Universidad pública, observamos también el sector que está en desacuerdo con nuestra premisa (20%).

**Tabla Nº 4**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: ¿Es correcta la afirmación que “la prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria, de no participar de la gestión de la universidad pública donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales”?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	77.5	77,5	77,5	77,5
	NO	22.5	22,5	22,0	22,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 4**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

Al igual que la interrogante anterior los resultados son óptimos para nuestra tesis, dejando claro que, el 77 % opinan que están totalmente de acuerdo que la prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria, de no participar de la gestión de la universidad pública donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales, una posición contraria es un mínimo un 23%.

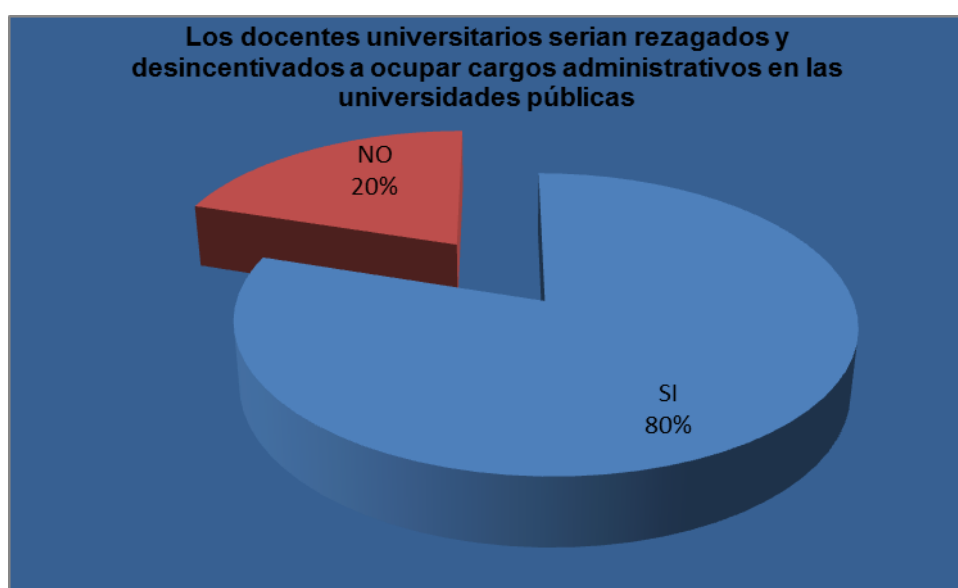
**Tabla N° 5**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: ¿Es cierto que, con la aplicación del artículo 132° de la actual ley universitaria, los docentes universitarios serian rezagados y desincentivados a ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria?



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	80.00	80,0	80,0	80,0
	NO	20.00	20,0	20,0	20,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 5**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

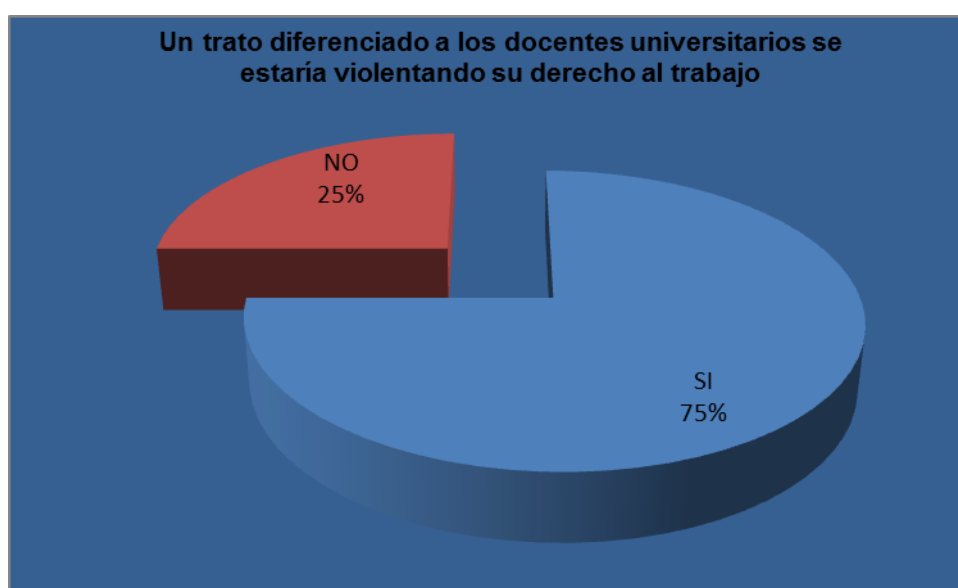
La interrogante planteada, tiene una respuesta positiva de 80% por parte de los encuestados hay una respuesta negativa que es contraria a la afirmación que con la aplicación del artículo 132° de la actual Ley Universitaria, los docentes universitarios serían rezagados y desincentivados a ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria.

**Tabla N° 6**

Frecuencia de respuestas al cuestionamiento: ¿Si prevenir la corrupción dentro las universidades públicas no se constituye como una causa objetiva para dar un trato diferenciado a los docentes universitarios se estaría violentando su derecho al trabajo?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	75	75,0	75,0	75,0
	NO	25	25,0	25,0	25,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 6**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

En la figura 6, de una encuesta realizada a 42 conocedores de nuestra problemática, se puede observar que la respuesta es dividida un 75% que está totalmente de acuerdo que prevenir la corrupción dentro las universidades públicas no se constituye como una causa

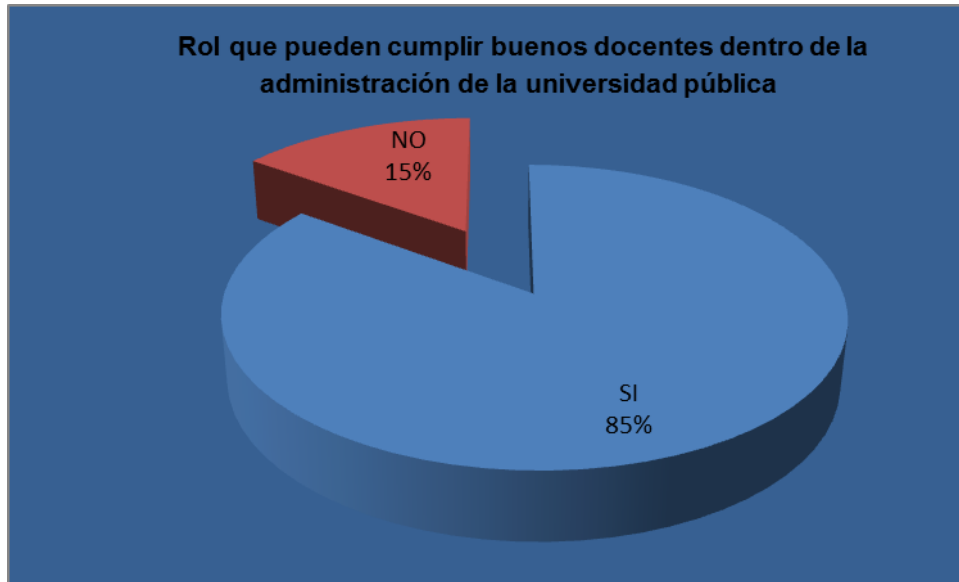
objetiva para dar un trato diferenciado a los docentes universitarios se estaría violentando su derecho al trabajo, hay una posición nada despreciable de 25% que está en desacuerdo con nuestra propuesta.

**Tabla N° 7**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: ¿Es cierto que, la incorporación del artículo 132º tuvo como fin limitar la participación de docentes universitarios de la universidad pública de la administración de estas, pues muchos han sido y vienen siendo investigados por hechos de corrupción luego de haber ocupado puestos dentro de la administración de la universidad pública, dejándose de lado el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de la universidad pública?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	85	85,0	85,0	85,0
	NO	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Gráfico N° 7**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

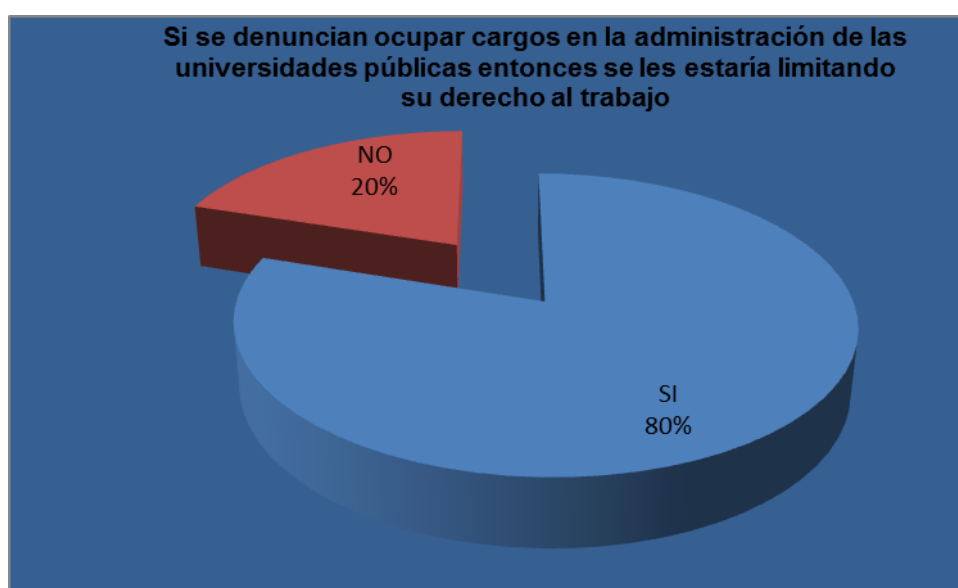
En el gráfico N° 7, se desprende de los resultados porcentuales del gráfico y la figura que ante la interrogante que la incorporación del artículo 132º tuvo como fin limitar la participación de docentes universitarios de las universidades públicas de la administración de estas, pues muchos han sido y vienen siendo investigados por hechos de corrupción luego de haber ocupado puestos dentro de la administración de las universidades públicas, dejándose de lado el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de estas, un 85% responde que está totalmente de acuerdo, la respuesta como vemos es abrumadora, en oposición de un 15% que señala estar en desacuerdo.

**Tabla N° 8**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: ¿Comparte la afirmación que “si los docentes universitarios siguen siendo denunciados por ocupar cargos en la administración de las universidades públicas entonces se les estaría limitando su derecho al trabajo”?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	80.00	80,0	80,0	80,0
	NO	20.00	20,0	20,0	20,0
	Total	100	100,0	100,0	100,0

**Gráfico N° 8**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

## Interpretación

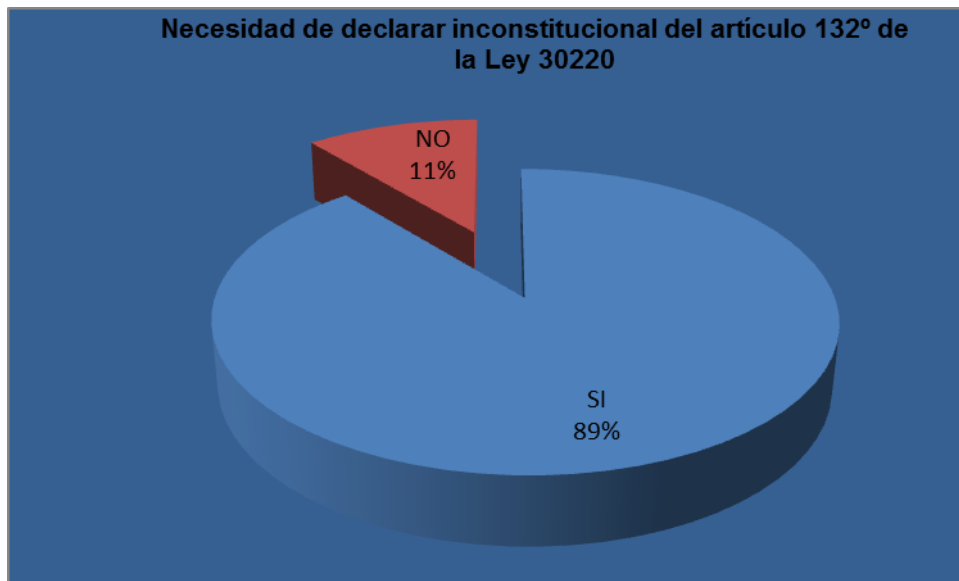
En la figura 8, de una encuesta realizada a 42 encuestados, responden que están totalmente de acuerdo en un 80% que si los docentes universitarios siguen siendo denunciados por ocupar cargos en la administración de las universidades públicas entonces se les estaría limitando su derecho al trabajo, un porcentaje en contra es del 20%.

**Tabla N° 9**

Frecuencia de respuestas a la pregunta: *¿Coincide con la afirmación que existiría la necesidad de declarar inconstitucional del artículo 132° de la Ley 30220 con la finalidad de concordar su ratio legis con la protección del derecho del trabajo de los docentes universitarios?*

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	89	89,0	89,0	89,0
	NO	11	11,0	11,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

**Gráfico N° 9**



**Fuente:** Encuesta realizada el 14 de agosto del 2017

### **Interpretación**

En el grafico 9, ante la premisa que se plantea a los encuestados el 89% responde que está totalmente de acuerdo que existiría la necesidad de declarar inconstitucional del artículo 132° de la Ley 30220 con la finalidad de concordar su ratio legis con la protección del derecho del trabajo de los docentes universitarios, hay una opinión en contra, la cual es mínima que está totalmente en desacuerdo, esto es un 11%.

### **5.2. Discusión de los resultados**

En aplicación de los derechos al trabajo y a la igualdad, derechos que goza todo peruano, debemos dar igualdad de condiciones, para acceder a un puesto de trabajo a todas las personas, así como para mantenerse en dicha plaza y para ascender a un nivel superior. Podemos observar, que de los 42 encuestados; el 82% está totalmente de acuerdo con que el artículo 132° de Ley Universitaria representa una prohibición que vulnera derechos

fundamentales de los docentes universitarios, por ello ha dado una respuesta positiva ante las interrogantes planteadas, encontrándose una respuesta contraria en desacuerdo de 18%, que no está acorde con la afirmación dada en la interrogante.

Hemos demostrado a través de las diversas teorías epistémicas que los derechos mencionados como el derecho al trabajo y el derecho de igualdad, tienen que tener prioridad y trascendencia en nuestro marco jurídico. Sin embargo, dicha situación no ha sido contemplada en la tan difundida Ley Universitaria, Ley N° 30220, puesto que son diversos los temas que, han sido cuestionados, siendo además muchos de ellos debatidos en el congreso y en los medios de comunicación.

Un tema que no ha sido objeto de pronunciamiento es el tema objeto de investigación, la prohibición tácita a los catedráticos de no participar en la gestión de la universidad pública esto se debe a la poca visibilidad de este fenómeno, así como la poca valoración de estos, como los profesionales más idóneos para la gestión administrativa de la universidad pública.

Si bien es cierto, había un fundamento basado en la aparición de hechos de corrupción, también es cierto que, esta situación es mínima, por lo que la limitación que genera la norma jurídica no justifica la vulneración de derechos, como ampliamente hemos desarrollado a lo largo del trabajo (derecho a la libertad de enseñanza, derecho al trabajo y el derecho a la igualdad).

Estamos de acuerdo con una reforma de nuestra educación superior, acorde a la exigencia de competencia que el mundo global exige, pero esta debe estar alineada con la protección de los derechos. Lo cual observamos en la práctica judicial, con el



tratamiento jurisprudencial en nuestro país de los derechos de las personas a través de los fallos de la Corte Suprema y principalmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En aplicación de los derechos al trabajo y a la igualdad, derechos que goza todo peruano, debemos dar igualdad de condiciones, para acceder a un puesto de trabajo a todas las personas, así como para mantenerse en dicha plaza y para ascender a un nivel superior. La norma en análisis, vulnera los derechos más trascendentales que posee todo trabajador, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo.

El derecho a la igualdad es definido por el Tribunal Constitucional como un límite al legislador que le impide aprobar leyes contrarias al principio de igualdad de trato; de ahí que la igualdad “se configura como un derecho fundamental de la persona a no sufrir discriminación jurídica alguna, esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable de esa disparidad de trato”. (f. 3.1, expediente N° 0261-2003-AA/TC)

**El texto del artículo 132° de la Ley Universitaria representa una gran confusión para la comunidad universitaria, pues su aplicación literal incluso representaría una contradicción manifiesta a la Constitución; la misma que en su artículo 146° indica que incluso la docencia es la única actividad compatible con la función jurisdiccional, dando la posibilidad a todos los jueces transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.**

La respuesta porcentual de la premisa N° 2, ha sido un contundente 80%, que está totalmente de acuerdo, la respuesta contraria es un 20 % que no está de acuerdo.

No olvidemos que en toda profesión la experiencia profesional, es uno de los factores cualitativos potenciales que va incidir en provecho de la esfera que se desempeñe, mayor aun si es que es el ámbito de la educación superior, en el caso de la docencia es un elemento importante para darle mayor calidad a la universidad.

La heterogeneidad y la diversidad de la formación de un profesional en la actualidad tienen repercusiones relevantes no solo para la educación superior, formación de profesionales y el futuro del país, la cual está enfrentada a un cambio del paradigma que cada vez se caracteriza por la calidad.

La formación profesional, capacitación y especialización, tiene amplia relación con una institución administrativa, denominada, proceso de gestión. Como señala Carrasco (2011):

“La gestión como estrategia es decisiva y valiosa para la conducción y dirección de las instituciones, adquiere suma importancia en los últimos tiempos, debiendo por ello constituir la clave fundamental y herramienta básica para alcanzar el desarrollo y maximización de la educación peruana, especialmente en la educación superior.” (p. 3)

De un diagnóstico respecto al proceso de gestión en relación a la calidad de la administración educativa en el servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción, así como de la información recopilada a lo largo de la investigación previa, hemos encontrado que en la relación de las variables objeto de nuestra investigación, existen limitaciones y carencias, que inciden que no se obtenga un óptimo resultado, o no se cumplen a cabalidad, los presupuestos que tiene la institución para el logro de sus objetivos, situaciones que podemos resumir en los siguientes enunciados:

El Docente Universitario, no solo es aquel profesional capaz de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino que también puede cumplir un rol significativo en la administración y gestión de las universidades públicas.

Se desprende de los resultados de la encuesta, de la interrogante N° 3 al igual que la respuesta anterior el 80%, está totalmente de acuerdo, observamos también el sector que está en desacuerdo con nuestra premisa (20%)

El docente universitario puede apoyar en el desarrollo de las funciones y procesos sustantivos de la universidad.

**La prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la ley Universitaria, de no participar de la gestión de las universidades públicas donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales.**

Al igual que en la interrogante anterior los resultados de la pregunta N° 4, son óptimos para nuestra tesis, deja claro que la información que figura en la tabla y gráfico, el 77 % opinan que están totalmente de acuerdo que la prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria, de no participar de la gestión de las universidades públicas donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales, una posición contraria es un mínimo de un 23%.

Hemos destacado los derechos que son vulnerados por la dación de dicha norma, que como hemos observado en nuestra investigación, no se ha advertido dicha lesión de derechos, en el ámbito académico, nuestro análisis demuestra una flagrante vulneración

de derechos que no se condice con la era del neo constitucionalismo, y la constitucionalización del derecho.

**Con la aplicación del artículo 132° de la actual Ley Universitaria, los docentes universitarios serian relegados y desincentivados de ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria.**

La interrogante N° 5, planteada, tiene una respuesta positiva de 80% por parte de los encuestados hay una respuesta negativa que es contraria a la afirmación que con la aplicación del artículo 132° de la actual ley universitaria, los docentes universitarios serian relegados y desincentivados de ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria.

**Si prevenir la corrupción dentro las universidades públicas no se constituye como una causa objetiva para dar un trato diferenciado a los docentes universitarios se estaría violentando su derecho al trabajo.**

En la pregunta N° 6, de una encuesta realizada a 42 conocedores de nuestra problemática, se puede observar que la respuesta es dividida, un 75% está totalmente de acuerdo en si prevenir la corrupción dentro las universidades públicas no se constituye como una causa objetiva para dar un trato diferenciado a los docentes universitarios se estaría violentando su derecho al trabajo, hay una posición nada despreciable de un 25% que está en desacuerdo con nuestra propuesta.

En el 2016, el diario Gestión indico “tenemos que un 30% de universidades públicas enfrenta crisis por denuncias de corrupción y lucha de poder. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, al indicar que esa situación

demuestra que la política de comisiones interventoras, dispuesta por la Asamblea Nacional de Rectores no ha funcionado. Esta situación demuestra que la política de comisiones interventoras, dispuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) no ha funcionado. El común denominador de la problemática de estas casas de estudio es la lucha interna por el poder, por querer manejar los recursos del canon y sobrecanon y las acusaciones de corrupción en la ejecución de obras para los alumnos". (p. 1)

**La incorporación del artículo 132º tuvo como fin limitar la participación de docentes universitarios de las universidades públicas de la administración de estas, pues muchos han sido y vienen siendo investigados por hechos de corrupción luego de haber ocupado puestos dentro de la administración de las universidades públicas, dejándose de lado el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de estas.**

En la pregunta N° 7, se desprende de los resultados porcentuales del gráfico y la figura que ante la interrogante de la incorporación del artículo 132º tuvo como fin limitar la participación de docentes universitarios de las universidades públicas de la administración de estas, pues muchos han sido y vienen siendo investigados por hechos de corrupción luego de haber ocupado puestos dentro de la administración de las universidades públicas, dejándose de lado el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de estas, un 85% responde que está totalmente de acuerdo, la respuesta como vemos es abrumadora, en oposición de un 15% que señala estar en desacuerdo.

Universidad	Problemática
Santiago Antúnez de Mayolo	Van seis comisiones reorganizadoras y nada. En la Intercultural hace poco hubo una quema de las oficinas administrativas.
UNSA de Arequipa	Denuncias de corrupción sobre sus autoridades”, añadió el legislador.

**Los docentes universitarios siguen siendo denunciados por ocupar cargos en la administración de las universidades públicas entonces se les estaría limitando su derecho al trabajo.**

En la pregunta N° 8, de una encuesta realizada a 42 encuestados, responden que están totalmente de acuerdo en un 80% que si los docentes universitarios siguen siendo denunciados por ocupar cargos en la administración de las universidades públicas entonces se les estaría limitando su derecho al trabajo, un porcentaje en contra es del 20%.

**Existiría la necesidad de declarar inconstitucional del artículo 132° de la Ley 30220 con la finalidad de concordar su ratio legis con la protección del derecho del trabajo de los docentes universitarios.**

En pregunta N° 9, ante la premisa que se plantea a los encuestados el 89% responde que está totalmente de acuerdo que existiría la necesidad de declarar inconstitucional del artículo 132° de la Ley 30220 con la finalidad de concordar su ratio legis con la protección

del derecho del trabajo de los docentes universitarios, hay una opinión en contra, la cual es mínima que está totalmente en desacuerdo, esto es un 11%.

### **5.3. Propuesta**

#### **Interpretación del artículo 132° de la Ley Universitaria por la vía de la Acción de Inconstitucionalidad**

Como lo hemos desarrollado consideramos que el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria vulnera derechos fundamentales de los docentes universitarios por lo que consideramos que, en virtud del Principio Constitucional de Conservación de la Ley, se debe interponer una acción de inconstitucionalidad por alguno de los sujetos legitimados por el artículo 203° de la Constitución, en particular por los Colegios de Profesionales del Derecho.

De esta manera el máximo intérprete de la Constitución realizará el test de proporcionalidad correspondiente a fin de emitir, como primera opción, una sentencia de carácter exhortativo, recomendando al Parlamento que, dentro de un plazo razonable con mejor técnica legislativa, expida una ley sustitutoria con un tenor que se encuentre alineado a las normas, principios o valores constitucionales. En caso que el Parlamento no expida texto sustitutorio alguno, le corresponderá al Tribunal hacer la precisión a fin de eliminar cualquier ambigüedad del artículo 132° de la Ley Universitaria.

En su defecto el Tribunal Constitucional podrá también, luego de realizar un test de proporcionalidad de derechos, emitir directamente una sentencia de carácter aditivo con

el objetivo de darle al artículo 132° de la Ley Universitaria una interpretación clara y acorde a las normas, principios o valores constitucionales.

Respecto al test de proporcionalidad, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias, se debe determinar si la medida es idónea, necesaria, racional y temporal, así como en estricto la proporcionalidad de la prohibición.

### **Modificación del artículo 132° de la Ley Universitaria por iniciativa legislativa**

Al analizar la coyuntura actual y los diferentes proyectos de ley, que proponen modificaciones a la norma en análisis, estimar pertinente que sea el propio Legislador quien enmendé su mala técnica jurídica resulta viable; por lo que hacemos factible nuestra propuesta a través del siguiente proyecto de ley:

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-**

#### **I. EL OBJETO DEL PROYECTO**

La presente iniciativa legislativa busca darle un sentido más amplio al tenor del artículo 132° de la Ley, incluyendo a los catedráticos en la gestión administrativa de las universidades públicas, los mismos que participarán en dicha actividad junto al personal no docente, superando de esta manera la prohibición tácita impuesta a los docentes de universidades públicas, quienes con la modificación podrán participar de la gestión de las universidades públicas, ya sea la misma en la que enseñen o no, esta norma es precisa respecto al rol de docencia que tiene el catedrático.

#### **II.- FUNDAMENTACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA**

1. En aplicación de los derechos al trabajo y a la igualdad, derechos que goza todo peruano, debemos dar igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo a



todas las personas, así como para mantenerse en dicha plaza y para ascender a un nivel superior, por ello el tenor del artículo 132° de la Ley, es atentatorio de derechos constitucionales.

2. El texto del artículo 132° de la Ley Universitaria representa una gran confusión para la comunidad universitaria, pues su aplicación literal incluso representaría una contradicción manifiesta a la Constitución; la misma que en su artículo 146° indica que incluso la docencia es la única actividad compatible con la función jurisdiccional, dando la posibilidad a todos los jueces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

3. El docente Universitario, no solo es aquel profesional capaz, de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino que también puede cumplir un rol significativo en la administración y gestión de la universidad pública.

4. La prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria, de no participar de la gestión de la universidad pública donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales.

5. Con la aplicación del artículo 132° de la actual Ley Universitaria, los docentes universitarios serían relegados y desincentivados de ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria.

### **III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO**

Esta iniciativa legislativa no implicará inversión de recursos del Tesoro Público, debía a que solo tiene por objeto modificar el tenor del artículo 88, y del artículo 132° de la Ley

Universitaria. De otro lado, las modificaciones que se proponen contribuirán a la consolidación de un marco legal donde se protejan efectivamente los derechos de las personas, evitando se vulneren los derechos de los catedráticos.

Por ello en base a nuestra investigación, proponemos la siguiente iniciativa legislativa:

#### **Artículo 88. Derechos del docente**

Los docentes gozan de los siguientes derechos:

88.1 Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del Perú y la presente Ley.

88.2 Elegir y ser elegido en las instancias de dirección institucional o consulta según corresponda.

88.3 La promoción en la carrera docente.

88.4 Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones Universitarias Públicas según sus competencias.

88.5 Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según sus competencias y las necesidades de la Institución Universitaria Pública.

88.6 Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de especialización o posgrado acreditados.

88.7 Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el sistema universitario.

88.8 Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o Viceministro de Estado, Presidente de región, conservando la categoría y clase docente.

88.9 Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de publicaciones por cada siete (7) años de servicios.

88.10 Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año.

88.11 Gozar de incentivos a la excelencia académica, los que se determinan en el Estatuto.

88.12 Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley.

**88.13 Participar en la gestión administrativa de las universidades públicas, sin ningún tipo de restricción. (Negrita nuestra)**

88.14. Los otros que dispongan los órganos competentes.

#### **Artículo 132. Personal no docente**

El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponde los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o privada. La gestión administrativa de las universidades públicas se realiza por servidores públicos no docentes y docentes de los regímenes laborales vigentes.

El personal docente que preste servicios en la gestión de la universidad pública, no podrá tener una carga horaria mayor a cinco horas semanales y deberán ser programadas en un horario que no interfiera con sus labores administrativas.

## **CONCLUSIONES**

**PRIMERO.** La lamentable situación de la educación superior en el Perú impulsó la reforma mediante la Ley 30220, reforma que buscaba principalmente establecer estándares mínimos de calidad en la prestación del servicio educativo en las universidades privadas y públicas, en estas últimas también se buscaba terminar con los grupos de interés que habían administrado las universidades públicas en las últimas décadas y que eran acusados de actos de corrupción, siendo algunas de las medidas tomadas en la reforma, inadecuadas o confusas. En el caso del artículo 132° la anfibología deviene de la mala técnica legislativa empleada en su redacción, lo cual ha producido que la interpretación de este artículo sea ambigua y se entienda que constituye una prohibición tácita a los docentes universitarios, generando confusión en sus operadores y en la comunidad universitaria en general. Es así que, muchos docentes universitarios de universidades públicas sean denunciados por el delito de nombramiento indebido e incluso las universidades sean sancionadas por la SUNEDU por esta razón.

**SEGUNDO.** La ambigüedad en la interpretación del tenor del artículo 132° de la Ley 30220, producto de la inadecuada técnica jurídica, vulnera el derecho constitucionalmente reconocido al trabajo de los docentes universitarios de universidades públicas por contener una prohibición tacita no idónea. Lo cual es contrario a lo señalado en nuestra carta magna, la misma que señala en el artículo 26, que en caso exista ambigüedad de una norma o una duda insalvable sobre el sentido de una norma de carácter laboral se aplicará la más favorable al trabajador.

**TERCERO.** La prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas, porque condiciona el derecho al docente universitario de poder ser parte de la gestión administrativa dentro de la universidad donde labora, e incluso cualquier otra universidad pública; y a la vez poder ejercer la cátedra, con la vigencia de este artículo, si ejerciera las dos acciones su conducta estaría subsumida en el tipo penal de Nombramiento y Aceptación Indebida de Cargo Público tipificado en el artículo 381° del Código Penal.

**CUARTO.** La exclusión de los docentes en la administración de la Universidad Pública representa un trato desigual que carece de una justificación objetiva y razonable, es así que la prohibición tácita expresada en este artículo no es la medida idónea, necesaria y por ende desproporcionada para lograr la finalidad deseada, por lo cual vulnera el derecho a la igualdad de este grupo de personas por su condición de docentes, impidiendo que accedan a un puesto de trabajo para el cual se encuentran capacitados, así como para mantenerse en dicha plaza o ascender a un nivel superior. Aun cuando, pueda considerarse que la prohibición contenida en el artículo en análisis sea una medida proporcional y que tiene por objeto promover la igualdad real de oportunidades, este debe ser objeto de modificación en su texto por no haber considerado el factor de temporalidad

de la medida, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en la STC N° 018-2003-AI/TC, a fin que exista razonabilidad jurídica en la prohibición a los docentes universitarios, esto es una relación lógico-axiológica entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado, tal como se describe en la sentencia citada.

### **RECOMENDACIONES**

**PRIMERO.** Al haberse concluido que la medida que prohíbe la participación de los docentes universitarios en la administración de las universidades públicas es desproporcional, se proponen los siguientes mecanismos en orden prelativo y en atención a los principios constitucionales, para declarar su inconstitucionalidad y posterior modificación.

**1.1** Se recomienda que, en virtud del Principio Constitucional de Conservación de la Ley, vía acción de inconstitucionalidad se le requiera al Tribunal Constitucional, tutela jurisdiccional a fin de que emita una sentencia exhortativa recomendando al Parlamento que dentro de un plazo razonable con mejor técnica legislativa, expida una ley sustitutoria con un tenor que se encuentre alineado a las normas, principios o valores constitucionales, eliminando cualquier ambigüedad del artículo 132° de la Ley Universitaria.

**1.2** Se recomienda que, en virtud del Principio Constitucional de Conservación de la Ley, vía acción de inconstitucionalidad se le requiera al Tribunal Constitucional, tutela jurisdiccional a fin de que emita sentencia de carácter aditivo con el objetivo de darle al artículo 132° de la Ley Universitaria una interpretación clara y acorde a las normas, principios o valores constitucionales, superando la vulneración a los derecho de trabajo,

libertad de enseñanza e igualdad del que gozan los docentes de las universidades públicas.

**SEGUNDO.** Se recomienda una nueva legislación, donde se asegure la intervención del catedrático en la administración de las universidades públicas, por ser no solo el profesional que más conoce la realidad de la universidad, sino que tiene una lectura sabia y experimentada para poder afrontar los problemas que se pudiera presentar, garantizando además el Derecho al trabajo. De allí que se proponga un proyecto de ley donde se adicione y se reformule la actuación del docente respecto a la gestión y administración de la universidad.

**TERCERO.** Se recomienda la derogación del artículo 132° de la Ley Universitaria, para que este aspecto sea regulado por las universidades públicas mediante sus propios estatutos, en virtud de la Autonomía de la que gozan, incorporando a los docentes de las universidades públicas, por ser ellos los profesionales con los conocimientos en prácticas y sistemas de gestión de una institución tan compleja como la universidad.

**CUARTO.** Se recomienda a los docentes universitarios que vean vulnerados sus derechos constitucionalmente reconocidos interponer una acción de amparo con la aplicación del artículo 132° de la Ley Universitaria, puesto que, tal como se expone en la STC N.º 830-2000-AA/TC este mecanismo procede cuando la vigencia de una norma de carácter auto aplicativo lesione de manera directa un derecho constitucional, tal como es el caso de la prohibición expresado en el artículo en análisis.

**QUINTO.** Se recomienda al Legislador o al Tribunal Constitucional que al modificar o interpretar el artículo 132° respectivamente, también incorporen lineamientos que

permitan mejorar la gestión del potencial humano, estableciendo estándares óptimos para los perfiles profesionales requeridos para ocupar puestos administrativos en las universidades públicas.

**SEXTO.** Se recomienda a las universidades públicas que incorporen en su estatuto medidas idóneas que faciliten la incorporación de los docentes en la administración de las universidades públicas, medidas como la reducción de carga horaria, programación de cátedra en un horario que no interfiera con sus labores administrativas y un sistema de evaluación constante a los docentes en general, así como, otras medidas destinadas a asegurar la mejora en la prestación del servicio educativo.

# ANEXOS



## MATRIZ DE CONSISTENCIA

### “LA NECESIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA AL ARTÍCULO 132° DE LA LEY 30220, LEY UNIVERSITARIA”

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Indicadores	Metodología
<b>Problema general.</b>  <b>P.G.</b> ¿La ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220, vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas?	<b>O.G. Objetivo general.</b>  Determinar si la ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas por haber empleado una mala técnica jurídica en su formulación.	<b>H.G. Hipótesis general.</b>  La ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas por haber empleado una mala técnica jurídica en su formulación.	<b>VI:</b> La ambigüedad en la interpretación del artículo 132° de la Ley 30220.  <b>VD:</b> Derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios.	VI  I1. Análisis de la Ley N° 30220  I2. Análisis exegético del artículo 132° de la Ley N° 30220  VD:  I1. Análisis sistémico de la normativa constitucional del ordenamiento jurídico peruano.	Según su finalidad es de naturaleza descriptiva con un enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, transeccional correlacional-causal  La técnica de investigación empleada es la encuesta y se ha utilizado el siguiente diseño muestral:  Población  Universo: 42 abogados con especialización en Derecho Constitucional.
<b>Problemas específicos</b>	<b>Objetivos específicos</b>	<b>Hipótesis Específicas</b>	<b>Variables Específicas</b>	<b>Indicadores Específicos</b>	
1. ¿El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la	1 Analizar si la prohibición tacita expresada en el tenor	1. El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de	<b>H.E.1.</b>  VI: El tenor del artículo 132° de la	I1. Análisis de ponderación constitucional al	Muestra: 40 abogados con especialización en Derecho Constitucional.

<p>libertad de enseñanza en las universidades públicas?</p> <p>2. ¿El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la gestión administrativa de las universidades públicas, vulnerando su Derecho al trabajo?</p> <p>3. ¿La exclusión de los docentes en la gestión administrativa de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable?</p>	<p>del artículo 132° de la Ley 30220 vulnera la libertad de enseñanza en las universidades públicas.</p> <p>2. Estudiar si la prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la gestión administrativa de las universidades públicas, vulnerando su derecho al trabajo</p> <p>3. Precisar si la exclusión de los docentes en la gestión administrativa de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable.</p>	<p>enseñanza en las universidades públicas por contener una prohibición tácita innecesaria.</p> <p>2. El tenor del artículo 132° de la Ley 30220 impide la participación de los docentes universitarios en la administración de las universidades públicas por contener una prohibición tácita inidónea que vulnera su derecho al trabajo.</p> <p>3. La exclusión de los docentes en la administración de las universidades públicas vulnera su derecho a la igualdad, por carecer de una justificación objetiva y razonable.</p>	<p>Ley 30220.</p> <p>VD: Libertad de enseñanza en las universidades públicas.</p> <p><b>H.E.2.</b></p> <p>V.I. Prohibición tácita expresada en el tenor del artículo 132° de la Ley 30220.</p> <p>V.D. Derecho al trabajo</p> <p><b>H.E.3.</b></p> <p>V.I. La exclusión de los docentes en la administración de las universidades públicas</p> <p>V.D. Derecho a la igualdad.</p>	<p>artículo 132° de la Ley Universitaria.</p> <p>I2. Análisis literal del artículo 132° de la Ley N° 30220.</p>	
--	---	---	---	---	--

## Instrumentos de recolección de datos

### CUESTIONARIO Nº 01

<b>TESIS: "LAS LIMITACIONES DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS"</b>	
Agradeceré a usted responder este breve y sencillo cuestionario, su aporte es muy importante para el logro del siguiente objetivo.	<b>OBJETIVO:</b> Determinar de qué manera la ambigüedad en la interpretación del artículo 132º de la Ley 30220, producto de la mala técnica jurídica, vulnera los derechos constitucionalmente reconocidos de los docentes universitarios de universidades públicas.
<b>GENERALIDADES:</b> Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y acumulativa; por lo que agradeceremos a las personas entrevistadas proporcionarnos informaciones veraces, solo así serán realmente útiles para la investigación.	<b>INFORMANTES:</b> La presente encuesta está dirigida a profesionales que están inmersos en nuestra problemática.

### **MARQUE USTED LA RESPUESTA, QUE USTED CREA CORRECTA**

1. ¿Es cierto que, en aplicación de los derechos al trabajo y a la igualdad, derechos que goza todo peruano, debemos dar igualdad de condiciones para acceder a un puesto de trabajo a todas las personas, así como para mantenerse en dicha plaza y para ascender a un nivel superior?

( ) Si ( ) no

2. ¿Comparte la afirmación que "el texto del artículo 132º de la Ley Universitaria representa una gran confusión para la comunidad universitaria, pues su aplicación literal

incluso representaría una contradicción manifiesta a la Constitución; la misma que en su artículo 146° indica que incluso la docencia es la única actividad compatible con la función jurisdiccional, dando la posibilidad a todos los jueces de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones?

☐ Si ☐ no

3. ¿Está de acuerdo que el Docente Universitario, no solo es aquel profesional capaz, de ser fuente de conocimiento y facilitador de la producción de este en las aulas universitarias, sino que también puede cumplir un rol significativo en la administración y gestión la Universidad pública?

☐ Si ☐ no

4. ¿Es correcta la afirmación que “la prohibición tácita a los docentes de universidades públicas, que se encuentra en el tenor del artículo 132° de la Ley Universitaria, de no participar de la gestión de las universidades públicas donde enseñen, es una disposición que vulnera los derechos humanos laborales”?

☐ Si ☐ no

5. ¿Es cierto que, con la aplicación del artículo 132° de la actual Ley Universitaria, los docentes universitarios serían relegados y desincentivados de ocupar cargos administrativos en las universidades públicas por una prohibición tácita inconstitucional del artículo 132° de la Ley Universitaria?

☐ Si ☐ no

6. ¿Es a su juicio correcta la afirmación que “Si prevenir la corrupción dentro las universidades públicas no se constituye como una causa objetiva para dar un trato diferenciado a los docentes universitarios se estaría violentando su derecho al trabajo”?

☐ Si ☐ no

7. ¿Es cierto que, la incorporación del artículo 132º tuvo como fin limitar la participación de docentes universitarios de la universidad pública de la administración de estas, pues muchos han sido y vienen siendo investigados por hechos de corrupción luego de haber ocupado puestos dentro de la administración de las universidades públicas, dejándose de lado el rol que pueden cumplir buenos docentes dentro de la administración de las universidades públicas?

☐ Si ☐ no

8. ¿Comparte la afirmación que “si los docentes universitarios siguen siendo denunciados por ocupar cargos en la administración de las universidades públicas entonces se les estaría limitando su derecho al trabajo”?

☐ Si ☐ no

9. ¿Coincide con la afirmación que existiría la necesidad de declarar inconstitucional del artículo 132º de la Ley 30220 con la finalidad de concordar su ratio legis con la protección del derecho al trabajo de los docentes universitarios?

☐ Si ☐ no

## **GLOSARIO**

### **Autonomía universitaria**

Como señala Cabrera (2010), en el artículo La Autonomía en Sistema Universitario:

“El Tribunal Constitucional hace referencia a este derecho indicando lo siguiente: La autonomía universitaria es la dimensión institucional de la libertad académica para garantizar y completar su dimensión personal, constituida por la libertad de cátedra. Tal dimensión institucional justifica que forme parte del contenido esencial de esa autonomía no solo la potestad de autonormación, que es la raíz semántica del concepto, sino también de auto-organización. Por ello, cada Universidad puede y debe elaborar sus propios Estatutos (STC 156/1994) y los planes de estudio e investigación (STC 187/1991), pues no en vano se trata de configurar la enseñanza sin intromisiones externas.” (STC 179/1996 [RTC 1996/179]). (p.5)

### **Calidad**

La norma ISO 8402 (1986) fue la base para el desarrollo de la norma ISO 9000 (2000) y es en esta norma de estandarización internacional que se define el termino calidad, como “el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas del producto o servicio”.

### **Derechos Humanos Laborales**

La definición de este término lo recogemos de la Opinión Consultiva OC-18/03, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente a la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, debido a que, como desarrolla Canessa (2006):

“En el tenor de esta Opinión Consultiva la Corte hacer un uso reiterado de la expresión “derechos humanos laborales”, o en su traducción en inglés “labor human rights”, para referirse a los derechos laborales que gozan los trabajadores por su condición de tal con independencia de su nacionalidad.”

### **Libertad de cátedra**

Siguiendo el concepto, recogido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 8 de la STC 091-2005-AA, del libro de Castillo (2004) “el titular de la mencionada libertad cuenta en el desarrollo de su labor docente tanto con un contenido de inmunidad que le protege frente a indebidas injerencias externas (contenido negativo), como con un conjunto de facultades de acción (contenido positivo)” (p. 163-164).

### **Neo constitucionalismo**

Siguiendo lo expresado por Gil Rendón (2010), el neo constitucionalismo nace como consecuencia de la aplicación del método de ponderación de la norma jurídica en el Estado de Derecho. Luigi Ferrajoli identifica dos modelos en el Estado de Derecho, el primero se basa en el principio de legalidad, donde la norma jurídica adquiere validez con el cumplimiento de la formalidad en su promulgación, mientras que, un segundo modelo le agrega a la formalidad propia de la norma jurídica un contenido moral a partir de la aplicación de una metodología de ponderación, por lo cual los jueces y toda autoridad deben realizar juicios valorativos para darle a la norma jurídica, en palabras de Mac Cormick en “Legal Reasoning and Legal theory”, un fundamento en base a la moral o en la naturaleza propia del ser humano.

### **Reforma Universitaria**

La reforma universitaria debe ser concebida como la respuesta del Estado a la necesidad de innovar los procesos de las instituciones del sector vinculadas a la educación superior, plasmando un contenido ideológico y teórico determinado para lograr resultados estratégicos en beneficio de la comunidad universitaria y por extensión en la sociedad.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Aljovín de Losada, Cristóbal (2002). *La universidad en el Perú*. Publicación. Lima: UNMSM, Fondo Editorial.
- Arce Ortiz, Elmer (2015). *La Nulidad del Despido Lesivo de Derechos Constitucionales*. Editorial Ubilex. Tercera edición.
- Arese, Cesar (2014). *Derechos Humanos Laborales*. Buenos Aires. Editorial Rubinzal Culzoni.
- Atienza, Manuel (2000). *Contribución para una teoría de la legislación*. Carbonell, Miguel y Pedroza de la Llave, Susana Thalía [Coords.]. Elementos de técnica legislativa. Ed. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas México.
- Bernales, E. M. (1996). *En la Constitución de 1993*. Tomo 3, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial PUCP.
- Best, John W. (1982). *Cómo Investigar en educación*. 9a ED. Editorial Morata. Madrid.
- Blancas Bustamante, Carlos. (2013). *Los fundamentos de los derechos fundamentales laborales*. Ponencia presentada para la incorporación de su autor a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, expuesta en Guayaquil.



- Blancas Bustamante, Carlos (2007). *Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo*, PUCP, Lima.
- Blancas Bustamante Carlos (2011). *La cláusula de Estado Social en la Constitución*. Lima. PUPC. Prologo.
- Bobbio Norberto (1992). *Teoría General del Derecho*. Bogotá. Editorial Temis.
- Bulygin, Eugenio (1991). *Teoría y técnica de la Legislación*, Revista Mexicana de Estudios Parlamentarios, México, 1a. época, vol. I, núm. 3, septiembre-diciembre de 1991.
- Canessa Montejo, Miguel F (2008). *Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (coge rights) y ius cogens laboral*. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 72, Madrid.
- Carbonell, M. (2007). *El Neo constitucionalismo en su Laberinto*. en Teoría del Neo constitucionalismo, edición de Miguel Carbonell, Madrid, Trotta
- Carrasco Díaz Sergio (2011). *Gestión educativa y calidad de formación profesional en la facultad de educación de la UNSACA*. Lima UNMSM. Tesis para optar el grado de magíster en educación con mención en gestión de la educación.
- Castillo Córdova, Luis. (2004). *El principio de libertad en el sistema educativo*. Lima: ARA Editores.
- Chirinos Soto, Enrique. (1984) *La nueva constitución al alcance de todos*. 3ra ed. Lima: AFA Editores.
- Congreso del Perú (2006) *Ley universitaria y exposición de motivos*. Lima.
- Cuenca Ricardo (2014). *Herido de muerte. Razones para una ley universitaria*. Lima: Instituto de estudios peruanos.

- Congreso De La República Del Perú. (2001). *Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos*. Lima: Congreso de la República del Perú. Comisión de Derechos Humanos y Pacificación.
- De La Cueva Mario (1949) *Derecho Mexicano del Trabajo Tomo II*. Méjico: Editorial Porrúa.
- Figuerola Gutarra Edwin (2010). *Neo constitucionalismo e interpretación constitucional ¿hacia nuevos horizontes en el derecho?* Lima: Revista Jurídica del Perú.
- Faralli, Carla. (2007) *La Filosofía del Derecho Contemporáneo*, Madrid: Hispania Libros.
- Freixes, Teresa, (1986) *Los derechos sociales de los trabajadores en el Constitución*. Madrid: MTSS.
- Frascarolo Carlos A. (2011). *Constitucionalismo Social*. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales De la Universidad Nacional de Tucumán.
- Ferrajoli, Luigi. (2003). *Pasado y futuro del Estado de Derecho*. Neo constitucionalismos. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli Luigi (2005) *Derechos y garantías. La ley del más débil*, 5ª ed., Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, Luigi. (2008). *Democracia y garantismo*, edición de Miguel Carbonell, Madrid: Trotta.
- García Martínez, María Asunción (1987). *El Procedimiento Legislativo. Publicación del Congreso de los Diputados*. Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General. Madrid.
- García Sánchez Noelia (2014). *Las Garantías constitucionales: El Derecho De Defensa Del Imputado*. Salamanca. Universidad de Salamanca.
- Gil R. (2011) *El neo constitucionalismo y los derechos fundamentales*. México. Año 6, Volumen 12 marzo.

- Gretel. Grupo de Estudios de Técnica Legislativa. (1989). *Curso de Técnica Legislativa*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.
- Gutiérrez Rodríguez Germán (1998). *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek* Universidad Iberoamericana. 1ª ed. México D.F
- Hernández Fernández, Aleida (2010). *Derechos humanos Laborales*. México. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
- Muñoz, Julián y Velarde (2000). *Compendio de Epistemología*. Madrid: Editorial Trotta.
- Ongaro Estrada, Andrés (2007). *La Legislación sobre la Educación Superior en el Perú* Lima: ANUR.
- Prieto Sanchís, Luis (2003) *Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales*. Madrid: Trotta.
- Pasco Cosmópolis Mario (2000). *Derecho Laboral*, Pontificia Universidad Católica del Perú. Selección de Textos. Lima
- Pérez Luño, Antonio (1999) *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. Madrid: Editorial Tecnos, 6ta. Edición.
- Pisarello Gerardo (2007). *Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción*. Madrid: Editorial Trotta.
- Prieto Sanchis, Luis. (2001). *Neo constitucionalismo y ponderación judicial*. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
- Ramírez Erazo, Ramón (2015). *Epistemología del Positivismo a Popper y Kuhn*. Lima San Marcos.
- Ramírez Liberio Victorino (2008). *Educación basada en competencias y el proyecto Tuning en Europa y Latinoamérica*. México. Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, campus Toluca, México.

- Rawls John (2006). *Teoría de la Justicia*. Traducido por María Dolores González. México. Fondo de Cultura Económica. Sexta Reimpresión
- Rawls John (2012). *Teoría de la Justicia*. Traducido por María Dolores González. México: Fondo de Cultura Económica. Primera Edición Electrónica.
- Rubio Correa, Marcial (1999). *El sistema Jurídico: Introducción al Derecho* Lima: Fondo Editorial PUCP. 5ª Edición.
- Rubio Correa, Marcial (1999). *Estudio político de la Constitución Política de 1993*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica.
- Salazar Ugarte Pedro (2008). *La Democracia Constitucional: Una radiografía teórica*. México: Fondo de cultura económica.
- Salmerón Fernando (1981). *¿Qué es y para qué sirve la epistemología?* Instituto de Investigaciones Filosóficas, U.N.A.M., México, D. F.
- Sosa Sacio, Juan Manuel (2010) *Los Derechos Fundamental. Estudios sobre los Derechos Constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho*. Lima: Gaceta Constitucional.
- Saavedra, Jaime (2016) Minedu: *El proceso de reforma universitaria va a durar “un par de años más”*, En el diario Gestión, jueves, 25 de agosto del 2016.
- Scamargo, Pedro Pablo.(1995). *Manual de Derechos Humanos* Ed. Leyer 1ªEd. Bogotá. p.33
- Silva Melgarejo Jorge Eduardo (2010). *El Delito de Nombramiento y Aceptación Ilegal en el Perú*. Lima: 26 de octubre.
- Truyol y Serra, Antonio (1979). *Los Derechos Humanos*. Madrid: Editorial. Tecnos
- Yamada Gustavo (2016). *¿Universidad o instituto? La hora de la reforma de la educación*. En el diario El Comercio. Domingo 31 de enero Del 2016.

## Fuentes electrónicas

Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2010), Estudio de Encuestas, Métodos de Investigación, 3º Educación Especial. Recuperado el 10 de noviembre del 2017 en [https://www.uam.es/personal\\_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso\\_10/ENCUESTA\\_Trabajo.pdf](https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCUESTA_Trabajo.pdf).

Arce Ortiz Elmer G. (2013) *Los supuestos de reposición en el despido individual* (La tipología del Tribunal Constitucional) Artículo recuperado el 10 de Marzo del 2016 en [http://www.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos\\_publicaciones/contenidos/contenido48/149-163.pdf](http://www.amag.edu.pe/web/html/servicios/archivos_publicaciones/contenidos/contenido48/149-163.pdf).

Castro Castro, José Francisco *Discriminación en las Relaciones Laborales. Algunos casos particulares*. Recuperado el 26 de abril del 2016 en [http://www.dt.gob.cl/1601/articles-65173\\_recurso\\_1.pdf](http://www.dt.gob.cl/1601/articles-65173_recurso_1.pdf).

Cámara de Diputados de Chile (2017), nota de prensa Proyecto Que Crea Un Nuevo Sistema De Educación Superior Centrará Debate De Sala De La Cámara. Recuperado el 02 de noviembre del 2017 en [https://www.camara.cl/prensa/noticias\\_detalle.aspx?prmId=132366](https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmId=132366).

Camposeco Cadena Miguel Ángel. *La Técnica Legislativa*. Recuperado el 9 de abril del 2017 en <http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont15/proces5.htm>.

Canessa Montejó, Miguel Francisco (2006) Los derechos humanos laborales en el derecho internacional. Tesis Doctoral recuperada en 10 de diciembre del 2017 en <http://hdl.handle.net/10016/3021>.

Carbonell, Miguel (2009) ¿Qué es el garantismo? IIJ-UNAM. México. Recuperado el 15 de octubre del 2017 en [http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Qu\\_es\\_el\\_garantismo\\_Una\\_nota\\_muy\\_breve.shtml](http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Qu_es_el_garantismo_Una_nota_muy_breve.shtml).

El Comercio, Universidades con más presupuesto e investigadas por corrupción, viernes 20 de noviembre del 2015. Recuperado en <http://elcomercio.pe/sociedad/peru/universidades-mas-presupuesto-investigadas-corrupcion-noticia-1857836>.

El Comercio, Hampa máter: investigan corrupción en 51 universidades, viernes 20 de noviembre del 2015. Recuperado en <http://elcomercio.pe/sociedad/peru/hampa-mater-investigan-corrupcion-51-universidades-noticia-1857768>.

Gil Rendón, Raymundo (2010) El Neo Constitucionalismo y los Derechos Fundamentales. Recuperado el 15 de diciembre del 2017 en <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/quid-iuris/article/viewFile/17373/15582>.

Mabres, Antonio (2012) Problemas y perspectivas de las universidades peruanas. Piura. Recuperado el 27 de marzo del 2017 en <http://www.grade.edu.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/npd/npd12-2.pdf>.